



La Aplicación por Trump de la “Ley de Embudo” al COVID-19 en Estados Unidos

Carmelo Mesa-Lago

Introducción

En buena parte del mundo, independiente de las ideologías, la COVID-19 se ha extendido por una subestimación de la severidad del virus, demoras en tomar acciones e irresponsabilidad de los dirigentes, los cuales son culpables de millones de contagios y cientos de miles de muertes. La “palma” se la lleva Donald Trump quien dijo que no usaba el tapaboca porque no tenía síntomas, se sentía muy bien y no quería dar a la prensa el placer de que lo vieran usándolo. Por meses, diariamente, apareció en la TV rodeado de subalternos todos sin medios de protección y ha llevado a cabo numerosas reuniones, incluyendo una con veteranos de la Segunda Guerra Mundial de más de 95 años de edad, sin preocuparle los contagios¹.

En sus dos primeras campañas electorales en Oklahoma y Arizona, en junio del presente año, Trump reunió a miles de personas sin máscaras lo que ocasionó rebrotes. A mediados de agosto, el número de casos en los Estados Unidos sobrepasaba los cinco millones (66.000 diarios) y los fallecidos eran 166.000 –todos con una tendencia creciente–, ambas cifras representan un 25 % del total mundial, mientras que la población estadounidense es el 4 % de la total.

El primer ministro inglés, Boris Johnson, continuó estrechando manos, se infectó y fue internado en una unidad de cuidados intensivos; en mayo el Reino Unido era el país con mayor número de muertes en Europa y el segundo en el mundo. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, un clon de Trump, llamó al virus “una pequeña influenza”, urgió el no aislamiento, tildó de bribones a los gobernadores de los Estados que establecieron restricciones, expresó que sentía las muertes, pero que era “el destino de cada cual” y detuvo la publicación de estadísticas de nuevos casos y defunciones. En su visita a la Casa Blanca un miembro de su comitiva estaba infectado; en un solo mes, dos ministros de salud renunciaron por conflictos con Bolsonaro y él nombró a un general sin conocimiento de salud; a mediados de agosto de 2020, Brasil tenía más de tres millones de infectados (incluyendo a Bolsonaro que se contagió en julio), el segundo mayor del mundo, 102.000 muertes y la tasa de defunciones por el COVID-19 la mayor en el mundo.

El Gobierno chino conoció, el 10 de diciembre de 2019, el primer caso de COVID-19 y lo ocultó, puso preso al médico que denunció la pandemia y que murió producto de esta enfermedad y finalmente decidió cerrar por completo Wuhan. De haber actuado de inmediato, los casos podrían haberse reducido en un 95 %. El presidente mexicano, Manuel López Obrador, aseguró que los aztecas son una raza especial que resistiría la COVID-19, abrazó a centenares en reuniones políticas, pidió al pueblo que siguiera saliendo a la calle y se besara, que los infectados se quedaran en sus casas y no fueran a los hospitales y afirmó que estaba protegido por amuletos. En agosto de 2020, había 486.000 casos y 53.000 muertes –se estima que, en realidad, eran el doble (cifras de Johns Hopkins University).

La irresponsabilidad se extendió a un pastor de Tampa, rabinos ortodoxos en New York y musulmanes en Pakistán que rehusaron cerrar

sus iglesias, sinagogas y mezquitas provocando infecciones. El 22 de mayo, Trump demandó a los Estados que de “inmediato” abrieran todos los sitios de culto religioso a los que declaró “esenciales” porque “necesitamos más plegarias”, si “los Estados no acatasen su orden, iría por sobre ellos” (Baker, 2020a). Esta orden la dio un hombre que ha alardeado que puede tocar los genitales a cualquier mujer, se ha divorciado tres veces, ha usado fondos de su campaña electoral para silenciar a una estrella pornográfica con la que tuvo sexo, ha dicho más de 15.000 mentiras comprobadas² y ha sido objeto de múltiples demandas por fraude debido a sus estafas millonarias. La única razón de su orden fue asegurar el voto de las comunidades religiosas ultraconservadoras estadounidenses, especialmente los evangelistas que rehúsan reconocer la obvia contradicción en la conducta presidencial.

Este artículo trata un tema no estudiado hasta ahora: las inequidades que ha generado y ampliado la COVID-19 entre grupos de la población, tomando a los Estados Unidos como un caso de estudio. La inequidad se analiza basada en la llamada “Ley del Embudo”: expresión acuñada popularmente para denunciar una injusticia evidente que nadie se atreve a subvertir y que, a menudo, surge de una confrontación en la que vence siempre el más fuerte, no el que tiene más razón, atentando contra la equidad. En otras palabras, significa ancho para los ricos y poderosos, y estrecho para los pobres y desprotegidos. Una perfecta aplicación de dicha Ley es Donald Trump. El objetivo fundamental en su vida siempre ha sido perseguir la riqueza, el poder y su bienestar personal a costa de todo lo demás, sin importarle las consecuencias nefastas de sus acciones³. Las inequidades de Trump, su familia y sus aliados republicanos han agravado las desigualdades económicas y sociales entre diversos grupos de la población estadounidense, fragmentados por ingreso, poder, ideología, raza, género, edades, ciudadanía y estados, a la par que la pandemia ha reforzado dichas disparidades.

El artículo analiza con abundante evidencia las inequidades de las políticas de Trump. Primero lo hace respecto a la economía, con énfasis en su reforma tributaria de 2017 y otra propuesta en 2020. Segundo, documenta la tardía e infausta política del presidente (o falta de ella) frente a la pandemia, supeditándola a sus intereses. Tercero, examina la inconstitucionalidad de su declaración de tener poder total frente a

los estados y el conflicto con estos. Cuarto, identifica numerosos casos en que Trump, su familia y aliados, así como las grandes corporaciones, se han beneficiado con la COVID-19. Quinto, estudia los paquetes de rescate económico, su inicial concentración en la ayuda a las grandes corporaciones, la batalla de los demócratas por hacerlo más equitativo y la distribución desigual de los fondos. Sexto, demuestra como el triaje (maximizar recursos insuficientes en casos de desastres dando prioridad a los pacientes según su grado de necesidad, comparado con la probabilidad de beneficiarse o sobrevivir) que teóricamente debe ser objetivo y ético, en la práctica privilegia a los ricos y sacrifica a los pobres, ancianos, hispanos y afroamericanos. Séptimo, analiza la reacción del pueblo a la política trumpista sobre la COVID-19 y su potencial impacto en las elecciones en noviembre, explorando posibles escenarios en que Trump intente perpetuarse en el poder.

El paradigma de la política económica del embudo: la reforma tributaria

Desde el inicio de su Gobierno, Trump ha tomado acciones que favorecen a los ricos. El mejor ejemplo es la reforma tributaria de 2017, la cual redujo del 35 % al 21 % el máximo pagado en impuestos por las corporaciones, así el 1 % de la población más próspera (que recibe cinco millones de dólares o más al año) concentró entre un 70 % y un 83 % del recorte total. La excusa fue que la fortuna ganada se invertiría en la economía cubriendo el déficit resultante, lo cual no ocurrió porque los favorecidos se favorecieron con el aluvión monetario o aumentaron los dividendos a sus accionistas. Si bien es cierto que la reforma duplicó la deducción general a todos los contribuyentes al impuesto a la renta, también ese impuso férreos límites a otras deducciones, como al impuesto inmobiliario, a los tributos estatales y municipales, a los pagos hipotecarios, de manera tal que para la clase media estas limitaciones normalmente representaron una pérdida mayor que la expansión de la deducción individual. Se proyecta que, en 2025, el 53 % de todos los contribuyentes pagarán más impuestos que en 2017.

Debido a la rapidez y maniobras de los republicanos con que se aprobó la ley de reforma, por simple mayoría y no dos tercios del Congreso como se requería, quedaron muchos “agujeros” que dieron

gran flexibilidad al Departamento del Tesoro para confeccionar sus regulaciones y estas fueron aprovechadas por los cabilderos de las corporaciones para conseguir mayores recortes de impuestos y violar algunas de sus obligaciones. Entre estas, se encuentra que las referidas compañías con sedes en el extranjero donde pagan menos impuestos – exportando empleos y recursos para aumentar sus ganancias, un caballo de la batalla de Trump en su campaña en 2016– estarían obligados a pagar en los Estados Unidos un tributo del 10,5 % sobre sus ingresos, pero fueron exentos, ahorrándose miles de millones de dólares y dejando un incentivo para continuar su conducta. Otra violación es que un recorte impositivo para incentivar la construcción de viviendas en comunidades pobres se ha usado para desarrollos urbanísticos en comunidades de alto poder adquisitivo con lazos en la Administración trumpista (Drucker y Tankersley, 2019).

En mayo de 2020, Trump y sus aliados republicanos planeaban una segunda reforma tributaria que cortaría más impuestos a los ricos, incluyendo: una reducción o eliminación del impuesto a las ganancias, el descuento al impuesto de todas las inversiones hechas por las compañías en el presente y el futuro, la suspensión del impuesto a la nómina que pagan los empleadores (contribuciones a las pensiones, el desempleo y la salud de los trabajadores), una expansión de la deducción por los gastos corporativos en comidas y entretenimiento y la imposición de límites a la responsabilidad legal por daños y perjuicios a los negocios. Los planes también hacen permanente la reforma de 2017 que por ley debe expirar en 2025 (Tankersley, 2020a). En la parte estrecha del embudo trumpista, como se analizará después, los republicanos se han opuesto a la ayuda a millones de desempleados (se estima que el 42 % de los empleos perdidos no se recuperará con la reapertura, los trabajadores que no acepten empleos por miedo al contagio perderán sus puestos y la ayuda al desempleo) y discutido la asistencia federal a los Estados que están al frente de la batalla contra la COVID-19. El desempleo ha provocado que 5,4 millones de trabajadores (24 millones incluyendo sus familias) perdieran el seguro de salud, 40 % más que durante la Gran Recesión (Stolberg, 2020c).

A lo descripto hay que agregar que la ejecución de la ley tributaria ha mermado drásticamente. Sentando un mal ejemplo, Trump adujo en la campaña electoral de 2016 que no podía publicar sus

declaraciones al impuesto sobre la renta, como era tradicional entre sus predecesores, porque estaba siendo auditado, pero que lo haría posteriormente. Pasados tres años y medio no había cumplido su promesa, alegando que está exceptuado del cumplimiento de la ley porque tiene absoluta inmunidad como presidente. Varios tribunales federales sentenciaron que debe hacerlo, pero el Departamento de Justicia argumentó que Trump está “sujeto a un trato diferente que cualquier otro ciudadano” (CNN, 21 junio de 2020). En julio, la Corte Suprema rechazó su argumento con respecto a la inmunidad (el voto 7 a 2, incluyó los dos jueces conservadores nombrados por él): “Hay 200 años de jurisprudencia estableciendo que el presidente (...) está sujeto al proceso judicial [incluyendo a Nixon y Clinton] (...) nadie está por encima de la ley incluyendo al presidente”, pero el voto bloqueó al Congreso para recibir de inmediato las declaraciones y reenvió el caso a los tribunales inferiores lo cual demorará la decisión. Aunque consiguió este triunfo, Trump protestó: “Esto es una persecución política (...) una cacería de brujas” (Liptak, 2020a, 2000b). El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, quien presentó la demanda a la Corte Suprema, ha interpuesto otro juicio en una Corte Federal solicitando que se obligue a Trump a presentar sus declaraciones de impuestos, además está investigando al Presidente y sus compañías por fraude bancario, incrementando su riqueza para conseguir varios préstamos multimillonarios de Deutsche Bank, banco que ha aceptado entregar la documentación correspondiente (Rashbaum y Weiser, 2020; Enrich y otros, 2020).

En 2018, el Servicio de Rentas Internas (IRS) declaró que no podría inspeccionar a los multimillonarios porque su presupuesto había sido cortado en 3.000 millones de dólares y habían perdido decenas de miles de empleados (hoy hay menos auditores que en 1953). Las grandes corporaciones y los que ganan más de diez millones de dólares al año eran antes auditados anualmente, ahora tienen dos veces más probabilidades de escapar al escrutinio: el 0,5 % de los más ricos representan un 20 % del ingreso que es ocultado al IRS, lo cual equivale a 50.000 millones de dólares anuales (Eisenger y Kiel, 2018). Por el contrario, el Servicio de Rentas Internas aumentó las auditorías a la clase media (cuyo ingreso imponible generalmente es el salario sobre el que se descuenta automáticamente el tributo y no pueden contratar a abogados expertos en impuestos), mediante el uso de computadores y

detonadores (*triggers*) que detectan posibles infracciones. Además, un tercio de todas las auditorías se concentra en el “crédito tributario” a los pobres, a los cuales se les exige que prueben que son elegibles. En resumen, no solo los ricos han recibido una fortuna, sino que ahora pueden impunemente evadir sus impuestos o declarar menos que lo que deben, mientras que lo opuesto ocurre a los grupos de ingreso medio y bajo, agravando la inequidad del sistema tributario.

La fortuna regalada a los ricos expandió el déficit fiscal en 1.100 millones de dólares en 2018, cuando ocurrió la mayor caída en el ingreso tributario y déficit fiscal entre treinta y seis países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (Drucker y Tankersley, 2019). Para “compensar”, la Administración de Trump propuso un recorte de dos billones de dólares a los programas de bienestar social, como cupones de alimentos a los pobres (alegando que es un incentivo para no trabajar), almuerzos para niños en las escuelas, préstamos a estudiantes, asistencia social sanitaria a los que carecen de ingresos (Medicaid), pensiones de seguridad social por vejez y discapacidad. Además, impuso un tope a las pensiones de seguridad social, cuando se excede dicho tope deben abonar impuestos entre un 50 % y un 85 % de los beneficios, lo cual afecta especialmente a la clase media con varios hijos (Social Security, 2020).

En el Foro Económico Mundial de Davos en 2020, Trump respondió a una pregunta de si habría más recortes a los programas sociales (como las pensiones) en caso de ser reelegido: “Sí, en su momento lo haré (...) de hecho, es lo más fácil de hacer” (CNBC, 2020). No ha habido que esperar tanto; en mayo se reveló un plan secreto para que las ayudas monetarias dadas a los estadounidenses durante la pandemia se descuenten de las futuras pensiones de seguridad social. La Cámara de Representantes requirió a la Casa Blanca que le envíe toda la documentación sobre esto; el director del equipo para defender a la seguridad social, Alex Lawson, ha calificado de “monstruoso” dicho plan que fuerza a los trabajadores a escoger entre “pasar hambre hoy o trabajar hasta morir” (citado en Johnson, 2020). Recientemente, el 89 % de los estadounidenses declaró estar en favor de impuestos mayores a los ricos para reducir la pobreza (Kristof, 2020c).

La política de Trump frente al COVID-19: tardía, caótica, ineficiente e inequitativa

El Consejo Nacional de Seguridad (CNS) bajo la Administración de Obama dejó a Trump, en 2017, un detallado plan para responder a una pandemia. Además, a petición de este Consejo, en setiembre de 2019, economistas de la Casa Blanca publicaron otro estudio advirtiendo que una pandemia podría matar medio millón de estadounidenses y devastar la economía; urgieron que no se le comparase con la influenza (Tankersley, 2020c). Trump no sólo ignoró esta advertencia, sino que adujo que la COVID-19 era similar a la gripe, asegurando que causaba más muertes. Demoró dos meses para adoptar de medidas contra el coronavirus, predijo que desaparecería milagrosamente cuando la temperatura ascendiera (el arribo del verano demostró su patraña) y culpó a las “noticias falsas” y a los “enemigos del pueblo” (medios de comunicación críticos) como, también, a los demócratas de exagerar el peligro con fines políticos. Según la Universidad de Columbia, la demora de Trump en tomar acción, solo por dos semanas, costó 56.000 vidas (Glanz y Robertson, 2020). Los pioneros en imponer restricciones obligatorias fueron los gobernadores de Estados severamente afectados por el virus, como New York, estrategia que ha logrado reducir los nuevos casos. Trump declaró que no era responsable de la política contra la pandemia ya que esta “concernía a los estados”.

En un largo y documentado artículo (tildado por Trump de “falso”), el *New York Times* probó como, desde enero, el presidente había sido informado del peligro del virus por diversas entidades y consejeros sanitarios, los cuales urgieron acciones rápidas, pero él estaba concentrado en el *impeachment* y en su acuerdo comercial con China a la que no quería antagonizar pues el tratado sería clave en su reelección (dicho tratado ahora está en el limbo). Además, los consejeros económicos advirtieron del daño que sufriría la economía, otro baluarte esencial para mantenerse en el poder. El artículo del *Times* describe la fragmentación dentro de la administración agravada por la caótica conducta de Trump y su tendencia a seguir sus instintos en vez del consejo científico (Lipton y otros, 2020). El presidente reprochó a uno de sus funcionarios que públicamente mencionó el peligro y lo tildó de alarmista.

Como es su costumbre, Trump desvió la culpa, en este caso a China y a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Contra toda evidencia

científica, acusó a la primera de fabricar el virus en un laboratorio y a la segunda, de demorar el aviso y la acción contra la COVID-19, aunque es precisamente lo que determinó. Trump retiró a su país de la OMS, a pesar de que debió contar con la previa aprobación del Congreso y que lo caótico que es tomar esa acción en la cresta de la pandemia (McNeil y Jacobs, 2020). También repetidamente ha culpado al expresidente Obama de no haber tenido un plan contra el coronavirus –el republicano, líder del Senado, Mitch McConnell admitió que había cometido un error al acusar al expresidente de no tener un plan; LeBlanc, 2020)– ni dejar almacenadas mascarillas y otros productos necesarios; más recientemente lo acusó de mandar a espiarle para deslegitimar su presidencia (“Obamagate”), “el mayor crimen y escándalo político en la historia de los Estados Unidos” y exhortó al senador republicano Lindsay Graham, un fuerte aliado, a que iniciara una investigación (citado por Baker, 2020b)⁴.

A inicios de marzo, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, recalcó que los cierres devastarían la economía, a lo cual el CNS ripostó que eso ocurriría si no tomaban las medidas precautorias necesarias. El desplome de la Bolsa de Valores fue el acicate que hizo cambiar al presidente. Por ello aconsejó (no obligó) el “distanciamiento social” hasta el 15 de abril. El continuado declive de la bolsa movió a grandes empresarios, políticos republicanos y *Fox News* a exhortar a Trump a que reabriera la economía porque una severa recesión sería catastrófica para su reelección.

Trump, el 22 de marzo, envió un tuit: “La cura no puede ser peor que el problema” (el virus), el día siguiente, en una entrevista para *Fox News*, el principal asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, ratificó: “Lo que dijo el presidente es correcto, tenemos un dilema muy difícil”, o sea, entre el dinero y la muerte sacrificaremos la segunda (citado por Kuns, 2020). Un congresista republicano de Indiana afirmó: “En la disyuntiva entre la pérdida de nuestro medio de vida y la pérdida de vidas, siempre escogeremos la última” (citado por Fredericks, 2020). Sin embargo, una encuesta, llevada a cabo a fines de junio, mostró que una mayoría del pueblo pensaba que la prioridad del Gobierno Federal debía ser contener al virus, incluso si perjudicase a la economía (Lerer y otros, 2020). El presidente, con una complacencia irresponsable, dijo que sería estupendo tener todas las iglesias llenas el domingo

de Resurrección. Pero, las cien muertes proyectadas, que podrían elevarse a dos millones, y la advertencia del doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Contagiosas y el miembro más prominente del equipo nacional para combatir la pandemia afirmó que levantar las restricciones agudizaría la crisis y el descalabro económico a la par que sería más difícil controlar el virus, forzando a Trump a posponer las medidas hasta fines de abril (a la meta anterior fallida la calificó de “aspiración”). Pese a todo, el 10 de abril, volvió a plantearse una reanudación de la actividad económica, diciendo que solo habría sesenta mil muertes en vez de cien, ocultando que dicha disminución en las proyecciones se debía a las restricciones impuestas por los Estados.

Las Secretarías de Salud y de Seguridad Interna advirtieron que terminar las restricciones después de treinta días podría provocar una segunda ola de contagios y muertes mayor que en la primera, así como una recesión más fuerte. La experta en salud Anna Scherbina predijo que para aplanar la curva infecciosa se necesitarían entre siete semanas de aislamiento en el mejor escenario y ocho meses en el peor, pero que esto salvaría dos millones de vidas lo cual ocurriría si no se implantasen las restricciones, a más de que el costo para la economía sería de trece billones de dólares o el 66 % del PIB proyectado para 2020, antes del COVID-19 (The Intellectualist, 2020).

La reapertura económica agrava la inequidad laboral: los trabajadores de menor ingreso y baja educación (con una mayoría afroamericana e hispana), empleados en ocupaciones manuales, tendrán que regresar al trabajo y exponerse al contagio (enfrentando el dilema entre trabajo o salud), mientras que la gran mayoría blanca con educación superior, empleada en ocupaciones de “cuello blanco” podrá continuar sus tareas desde sus casas.

La declaración de poder total frente a los estados y la reapertura temprana

Trump asumió los poderes que otorga la Ley de Defensa de la Producción cuando hay una emergencia nacional, pero ha fracasado en: a) diseñar un plan efectivo y obligatorio para enfrentar la crisis

sanitaria e iniciar la apertura minimizando las muertes; b) crear un comando unificado federal para coordinar todas las medidas; c) usar desde el principio la reserva federal de medicinas y equipo para combatir la pandemia, porque “esa reserva es nuestra” y el problema debe ser resuelto por los estados, lo cual provocó competencia entre ellos y una escalada de precios; d) mintió al asegurar que los exámenes de diagnóstico estaban disponibles para todos los que lo solicitaran⁵; e) demoró la compra de suministros adicionales y el mandato a las empresas privadas que los fabricaban, hasta que la pandemia alcanzó niveles alarmantes; f) acusó a varios gobernadores (especialmente al de New York) de exagerar las necesidades⁶ y g) finalmente comenzó a enviar los ventiladores y máscaras a cuentagotas, demandando a los estados que no se quejaran tanto y mostraran “su aprecio”. Por el contrario, Trump sigue su batalla para terminar el Obamacare⁷ (impidió una nueva ronda de registro en el programa a pesar de la pandemia), lo cual dejaría a unos veinte millones de personas desprotegidas (especialmente mujeres porque carecen de cobertura), pues no tiene un sistema sustitutivo.

El 13 de abril, al anunciar su intención de reapertura económica, Trump declaró rotundamente: “(...) el presidente de los Estados Unidos tiene autoridad total (...) y los gobernadores lo saben (...)”, una flagrante contradicción con su previa declaración que él no era responsable de frenar coronavirus, esta tarea la debían llevar a cabo los Estados. Los periodistas le interrogaron sobre las bases de su afirmación, Trump mencionó “numerosos preceptos”, sin citar uno y paró, en forma brusca las preguntas (Jacobs y otros, 2020). La Constitución establece que son los estados, no el gobierno federal, los que tienen la autoridad para responder a una crisis de salud y decidir cuándo terminar las restricciones. El gobernador de New York, Andrew Cuomo refutó a Trump: “No es verdad, no es legal, es una violación de la X Enmienda (...) no tenemos un rey” y agregó que declinaría una orden presidencial de reabrir el estado (Villarreal, 2020). Diez gobernadores (todos demócratas menos uno) que tomaron medidas restrictivas acordaron resolver cuándo y cómo se levantarán las restricciones. Manifestando su enojo contra esta decisión, Trump declaró que era “un motín”⁸.

La confrontación fue ganada por los gobernadores. El 16 de abril, Trump dijo que estos dispondrían cuándo y cómo hacer la reapertura,

basados en datos sobre la pandemia. El presidente solo dio unas guías voluntarias sobre los pasos a tomar. Pero los gobernadores reclamaron que era necesario hacer exámenes masivos antes de reabrir sus estados, para ello, debían contar con la ayuda del Gobierno Federal⁹. Trump no solo se rehusó, sino que exhortó a sus seguidores a que hagan demostraciones demandando la apertura, propiciando así el contagio y ahondando aún más la división en el país. La Corte Suprema controlada por los conservadores respaldó a los manifestantes contra el gobernador de Nueva York obligándole a levantar sus restricciones sobre los negocios y reuniones, aunque no sobre las escuelas. En Pensilvania, los condados con mayoría republicana, unidos con algunos negocios, desafiaron al gobernador demócrata demandando una apertura más rápida y extensa (Beck, 2020; Wolf, 2020a). Los manifestantes portaban armas, como AR-15 rifles semiautomáticos y hasta una bazuca, y ocurrieron agresiones contra personas que usaban máscaras o policías que ordenaban a los descubiertos que se las pongan. Todo esto a pesar de que las encuestas mostraban que entre un 70 % y un 90 % de todo el país apoyaba las restricciones, incluso si estas requerían suspender, en forma temporal, ciertas libertades y causar un daño económico.

El 4 de mayo, veintisiete Estados reabrieron sus economías siguiendo las exhortaciones públicas de Trump de “iliberar los estados!” (O’Neill, 2020). Varios gobernadores republicanos apoyaron al presidente. El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, en una entrevista para Fox News, urgió la reapertura expresando que los ancianos deberían arriesgar su salud en favor de la economía: “(...) regresemos al trabajo (...) aquellos con 70 o más años nos cuidaremos, pero no sacrifiquemos al país” (citado por Leonardi, 2020). A pesar de la enorme crítica a su insensibilidad, un mes después ratificó: “(...) hay cosas más importantes que vivir y eso es salvar al país” (Samuels, 2020). El gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, reabrió el Estado a pesar de las críticas de los expertos sanitarios con motivo del riesgo de crecimiento de las infecciones y muertes por el virus; como se vaticinó, aumentó el número de casos y muertes, pero Kemp bloqueó a los gobiernos municipales que ejecutaran las órdenes de usar máscaras siguiendo el consejo de los expertos. El segundo Estado mayor en población en los Estado Unidos, Texas, con treinta millones, reabrió la economía abruptamente, después de un cortísimo confinamiento, por ende, en el mes de junio, el número de casos se duplicó y el

governador tuvo que detener el proceso y ordenar el uso de máscaras (Glanz y Robertson, 2020; Bosman, 2020; Fausset y otros, 2020). El gobernador de Florida, Ron DeSantis, un devoto de Trump, que tampoco usa máscara, abrió su Estado a pesar de que sólo el 2 % de la población había recibido exámenes de diagnóstico; estadísticas de los examinadores mostraban mayores muertes por el virus que los datos oficiales, el gobernador prohibió mostrar dichas cifras. Además, los visitantes de los estados norteros que residen temporalmente en Florida durante el invierno y fallecieron a causa del COVID-19 eran reportados como muertes en los Estados de donde procedían (Ross, 2020; Marchante y Cetoute, 2020), también, muchas defunciones ocasionadas por el virus eran registrados por pulmonía, problemas cardíacos u otras enfermedades. La administradora del Departamento de Salud del Estado fue despedida por el gobernador después de que expresara su preocupación por esos problemas. A mediados de julio, la inercia del gobernador, la falta de máscaras y las fiestas masivas en casas dispararon los casos diarios en Florida a 15.300 (500.000 en total a inicios de agosto), rompiendo todos los récords, atestando los hospitales y abrumando al personal sanitario. El gobernador anunció que pararía la reapertura pero que no cerraría establecimientos, sin embargo, la magnitud de nuevos casos movió a varios alcaldes a clausurar bares y restaurantes, ordenar el uso de máscaras, decretar el toque de queda y, en algunos municipios, clausurar de nuevo las playas (Martin, 2020a; Taylor, 2020; Stolberg y Weiland, 2020b). Por otra parte, el parque el Mundo de Disney, en Orlando, reabrió sus puertas y será una fuente de nuevos contagios. En julio, de los diecinueve Estados que no habían ordenado el uso de máscaras, dieciocho tienen gobernadores republicanos. Las artimañas de DeSantis en Florida y de Bolsonaro en Brasil están siendo imitadas por Trump y el vicepresidente Mike Pence para ocultar las cifras reales de la incidencia del COVID-19.

El presidente, dos meses después de declararse la pandemia, todavía carecía de un plan nacional para reabrir al país y pasó la decisión a los Estados (una vez más rehusó tomar responsabilidad por las consecuencias de la reapertura), los cuales deben tomar medidas para asegurarse que se minimicen los contagios y las muertes. De los veintisiete Estados que reabrieron, sólo diecinueve cumplían estos criterios y el resto sufría un ascenso en las infecciones diarias. Solo el Estado de New York experimentaba una disminución de los casos

y muertes, por ello, el gobernador estaba siendo muy cauteloso en la reapertura. Christi Grimm, inspectora general para supervisar la pandemia (con más de dos décadas de experiencia con administraciones republicanas y demócratas) criticó los vaivenes y contradicciones de la política del presidente, un irritado Trump tachó de “erróneo” dicho informe, acusó a Grimm de ser un agente de Obama y la despidió (Segers, 2020). Dicha conducta ha persistido contra cualquier funcionario independiente con deber de controlar el abuso del poder (en el momento de terminar este trabajo, Trump había despedido a cinco inspectores generales; Sanger and Savage, 2020).

A fines de julio había más de cuatro millones de casos confirmados, el mayor del mundo (un cuarto del total), mientras que el número de muertos ya era un cuarto de las bajas durante la Guerra Civil, un tercio de los estadounidenses fallecidos en la Primera Guerra Mundial y superior a todos los periclos en las guerras de Corea, Vietnam, Golfo Pérsico, Afganistán e Iraq (cálculos del autor). El 2 de mayo, el presidente cambió de opinión. Primero declaró victoria contra la pandemia y dijo que iba a terminar el equipo nacional para luchar contra ella¹⁰. Al día siguiente, debido a la reacción negativa a su anuncio, adujo que había descubierto lo popular que era el equipo, así que decidió mantenerlo, pero alterando su objetivo: ya no se centraría en la pandemia sino en la reapertura económica. Lo que no cambió fue su designio de priorizar la reelección sobre la muerte masiva de su pueblo. Para no dejar dudas, el referido equipo había desarrollado un plan detallado de las precauciones que deberían tomarse en el proceso de reapertura y la Casa Blanca lo rechazó alegando que era demasiado regulador, podría causar daño a la economía y violar la libertad religiosa (las precauciones incluían distanciamiento social en las iglesias). A mediados de junio, el equipo dejó de hacer las comparecencias diarias en la TV debido a que Trump no quería que el doctor Fauci siguiera dando cifras sobre el incremento de los contagios.

En su declaración ante el Senado¹¹, el 12 de mayo, Fauci advirtió:

Estoy preocupado de que si ciertas áreas –ciudades, estados, etc.– abren de forma prematura, sin tener la capacidad de responder de forma efectiva y eficiente (...) comenzaremos a ver gérmenes [casos] que podrían convertirse en brotes... Hay un riesgo real de que se desate un brote que no seamos capaces de controlar, el cual nos atrasaría,

no solo generando sufrimiento y muerte que podrían evitarse, pero también devolvemos al punto de partida en el camino a la recuperación económica (citado por Stolberg, 2020a).

El senador republicano libertario Rand Paul cuestionó la confiabilidad de los modelos predictivos de la pandemia y argumentó que sería un error no abrir las escuelas, espetando a Fauci: “Usted no es la persona que hará las decisiones”. Fauci respondió: “Deberíamos ser humildes sobre lo que no sabemos...yo soy un científico [que] no doy consejos en asuntos económicos ni en otros temas que no sean la salud pública [tampoco] tomo las decisiones ni soy la única voz en esto” (citado por Stolberg, 2020a). Seguidamente amonestó contra los que piensan que los niños son completamente inmunes a la pandemia y se refirió al síndrome inflamatorio que ha matado a varios menores de edad y enfermando a un centenar de ellos, sugiriendo que reabrir las escuelas aumentaría dicho riesgo; por último, afirmó que sería iluso que las escuelas esperasen una vacuna o un tratamiento para el coronavirus que permitiera a los estudiantes regresar a las aulas en el otoño, puesto que tomaría, al menos, un año desarrollarla. Trump declaró que las cautelas de Fauci eran “inaceptables” y que el experto quería “jugar con los dos lados” (Blake, 2020).¹² Por este motivo, en julio comenzó una campaña pública para desprestigiar a Fauci, quien es un funcionario federal de carrera que no puede legalmente ser despedido, salvo si se prueba que ha cometido un delito. El experto calificó de absurdas las acusaciones, las cuales solo distraen de la preocupación central que es combatir la pandemia. Arriesgando una mayor expansión del virus que estaba en ascenso en el país, en julio, Trump presionó a los gobernadores y alcaldes para que, en agosto, abrieran todas las escuelas y reanudaran la enseñanza presencial, además los amenazó con quitarles la ayuda federal si no reabrían (para lo cual no tiene poder legal). El objetivo era estimular la economía (el confinamiento de los niños en sus casas impide a los padres regresar al trabajo) y ayudar a su reelección sin importarles los contagios y muertes (Baker y Green, 2020).

El Centro de Control de Enfermedades y Prevención (CDC, por sus siglas en inglés) había preparado un documento que advertía sobre el alto riesgo de reabrir las escuelas y, para ello, facilitaba un plan detallado con numerosas cautelas y medidas obligatorias; Trump no había revelado dicho plan y, cuando se filtró al público, lo rechazó por ser

“muy fuerte y costoso”, mientras que la secretaria de Educación Betsy DeVos dijo que sería suplementario en vez de reemplazar cualquier regulación federal, que no se ha publicado. Varios distritos escolares, especialmente en California, se negaron a reabrir, así como varias universidades. Trump protestó: “Están perdiendo un montón de vidas al mantener las escuelas cerradas”, justo lo que ocurrió con su plan de reapertura (Sullivan y Green, 2020; Hubler y Goldstein, 2020). A fines de julio, sucumbiendo a la enorme presión de Trump, el CDC apoyó la reapertura escolar, aunque acompañada de recomendaciones de cómo hacerla para maximizar la seguridad de los alumnos. A pesar de la afirmación de Trump de que los niños tienen muy poca posibilidad de infectarse, en las dos últimas semanas de julio, 97.000 niños se contagiaron y el número de casos infantiles había crecido un 90 %, esto antes del comienzo de la reapertura escolar (Barron, 2020).

El 26 de mayo, día de asueto que conmemora los caídos en guerras, las playas y lagos de los Estados Unidos estaban atestados de bañistas sin portar máscaras ni guardar distancias mínimas, los guardias fueron incapaces de impedir estas situaciones porque la mayoría de los estados carecía de órdenes para ejecutar precauciones. Posteriormente, las autoridades pidieron que voluntariamente dichas personas guardaran catorce días de cuarentena, una petición que obviamente ignoraron los infractores. La convención nacional republicana que se celebró, en agosto, en Charlotte, Carolina del Norte, el gobernador demócrata advirtió que debido a la pandemia habría límites en el número de asistentes, agregando que debían usar máscaras; Trump lo amenazó que si no garantizaba una exención total de restricciones, trasladaría el evento a otro estado. De inmediato, el gobernador de Florida la ofreció como sede: “Qué diablos, soy un republicano y será muy bueno para nosotros tener ese evento por el impacto económico que tendrá” (unos doscientos millones dólares), desdeñando cualquier efecto sanitario (Astor, 2020).

Trump decidió hacer la convención en Jacksonville, la capital del estado floridano que experimenta la mayor escalada de contagios en la nación. El presidente realizó la primera reunión de su campaña electoral en Tulsa, Oklahoma; aunque solo llenó un tercio de los asientos en un auditorio interior, se contagiaron ocho miembros de su equipo y seis agentes del servicio secreto, así como el gobernador del Estado,

un republicano que rechazó el uso de máscara y el distanciamiento social. La segunda reunión fue en Tucson, Arizona, que tiene el 1,6 % de la población total de la Unión Europea y sufría tantos casos diarios como esta. Ambas reuniones se efectuaron sin precauciones y provocaron rebrotes. Las celebraciones por el 4 de Julio, Día de la Independencia, fueron canceladas en la gran mayoría del país, pero Trump ordenó fuegos artificiales en el monte Rushmore, Dakota del Sur, que congregó miles de personas, sin cautela alguna. El escultor de las caras gigantes de cuatro presidentes tenía lazos con el Ku Klux Klan y un efecto especial proyectó la cara del ególatra Trump junto a las otras cuatro (Fausset y otros, 2020; Bernard, 2020; Karni, 2020a). Otra reunión de campaña, programada para el 11 de julio en New Hampshire, se suprimió culpando a una tormenta, pero en realidad fue por el temor de una asistencia escasa (Karni, 2020b).

Dando un giro de 180 grados, el 21 de julio, Trump reconoció en una alocución televisiva que la COVID-19 “probablemente empeorará antes de mejorar”; después de seis meses de afirmar justo lo opuesto, la realidad de la pandemia venció la ciega tozudez del presidente, quien en marzo había aseverado “de ninguna forma voy a cancelar la convención (...) pues estaremos muy bien, mucho antes”. Más aún, aconsejó el uso de máscaras, lo cual antes había sentenciado de inocuo e incluso dañino, y aseveró: “Ustedes me vieron usándola varias veces y continuaré haciéndolo”, una tergiversación pasmosa de la verdad. Dos días después, Trump canceló la convención, atribuyéndola a la severidad del virus (“No hay nada más importante en nuestro país que mantener sano al pueblo”), aunque sin admitir su colosal error de cambiar la sede de Charlotte a Jacksonville. Un observador planteó que, si la severidad del virus era la causa, cómo podía seguir insistiendo en reabrir las escuelas (Baker, 2020c, 2020d). Las verdaderas razones de su vergonzosa retirada eran otras: las encuestas, abrumadoramente, criticaban la actuación del presidente frente al virus (los casos en julio eran el doble que durante la primera ola del virus en marzo); el 62 % de los votantes en Florida creían que era peligroso realizar la convención allí; muchos delegados republicanos anunciaron que no asistirían; el alcalde de la ciudad requirió el uso de máscaras en la convención y el Comité Nacional Republicano quería hacerla al aire libre y limitando la asistencia; los republicanos que donaron millones de dólares para Charlotte perdieron su dinero y eran renuentes a dar más debido a

la incertidumbre; los hoteleros habían dado un plazo cercano a los organizadores de la convención para hacer reservaciones y, si después cancelaban, perderían su dinero; la escalada de contagios y muertes afectaría a la población envejecida del estado floridano y a sus votos en noviembre, y los asesores del presidente, incluyendo su nuevo jefe de campaña, le aconsejaron la cancelación (Karnie y otros, 2020a, 2020b; Haberman y otras, 2020b).

Preocupaba la evidencia de países que adoptaron medidas restrictivas más tempranas que los Estados Unidos y comenzaron a reabrir sus economías con más cautela, porque a mediados de mayo habían ocurridos rebrotes en Alemania, China, Corea del Sur y España (Bloomberg News; RTVE, 2020). En el país del Norte, a fines de mayo, los nuevos casos del virus descendían en catorce estados, se estancaban en veintiocho y crecían en ocho, resultado del confinamiento y del aislamiento social practicado por casi dos meses (el 44 % de todos los estadounidenses se aislaron en sus casas). Se hicieron varias proyecciones del aumento de las muertes por la reapertura estadounidense. La Universidad de Pensilvania proyectó que las muertes nacionales acumuladas crecerían de 90.000 a mediados de mayo a 157.000 a fines de julio. El Colegio Imperial de Londres ratificó que la desescalada de Trump provocaría, en agosto, más de 200.000 muertes y esto fue respaldado por Fauci en su segundo testimonio en el congreso a inicios de julio (Baker, 2020c; Stolberg y Weiland, 2020b). Las muertes por COVID-19 primero bajaron debido a las restricciones, pero con la reapertura, a mediados de julio, estaban subiendo en veinte estados y a fines de julio crecieron el 64 % en dos semanas en todo el país (Leatherby, 2020; Baker, 2020d). El 11 de agosto, había 163.000 muertes, confirmando las proyecciones citadas, y esto antes de que ocurriese el rebrote previsto por la reapertura de las escuelas y universidades en ese mes.

Un serio problema es que solo entre el 7 % a 17 % de la población había sido infectada y probablemente era inmune, pero se necesitaba al menos entre un 60 % y un 70 % para evitar un rebrote (Popovich y Sanger-Katz, 2020). Una encuesta de la AP mostró que el 60 % de la población apoyaba permanecer en sus casas salvo por necesidades esenciales (Mervosh y Harmon, 2020). En los Estados que reabrieron rápido sin una previa disminución de los casos (la gran mayoría con

gobernadores republicanos), como Alabama, Arizona, California, Carolina del Norte, Florida, Minnesota, Mississippi, Montana, Texas y Utah, los números de contagios siguieron creciendo (Bosman y otros, 2020; Phillips, 2020). En general, los Estados demócratas del oeste medio y del noreste reabrieron despacio y una vez cumplidos los criterios científicos, mientras que los Estados republicanos, especialmente, en el sur del país reabrieron más temprano y la gran mayoría sin cumplir dichos criterios. Los expertos habían advertido que habría un rebrote probablemente peor que en los países antes citados que reabrieron antes que los Estados Unidos, pero con muchas más restricciones previas. A comienzos de julio, las infecciones en Norteamérica estaban subiendo en treinta y seis Estados y el número de casos diarios se disparó en un 90 %; cada contagiado infectaba, a su vez, a diez personas (Stolberg y Weiland, 2020b). A más temprana la reapertura, mayor fue el incremento de los contagios y menor el declive: entre los Estados que reabrieron antes del 1 de mayo, seis sufrían casos ascendentes y solo en dos había descensos, mientras que en aquellos que reabrieron antes del 15 de mayo, las cifras eran catorce y seis, y entre los que reabrieron más tarde, eran ocho y diez (Gamio, 2020).

Frente al incremento de casos y muertes, Trump primero tachó de “exageradas” e “infladas” las cifras, argumentando que era un fraude de los demócratas para perjudicarlo en su reelección, por el contrario, la enorme mayoría de los expertos sanitarios en el mundo, incluyendo a Fauci, afirmó que los casos y muertes estaban subestimados. En una declaración ante el Congreso a fines de junio, Fauci informó sobre el auge de la pandemia en más de la mitad del país, mientras que Trump continuó insistiendo que iba a desaparecer, lo cual fue negado por el epidemiólogo en su testimonio. Otros expertos testificaron sobre la necesidad de aumentar los diagnósticos que eran insuficientes (en julio, la incapacidad para hacer diagnósticos generó colas por manzanas en varios Estados), así como de trazar los contactos tenidos por los contagiados a fin de controlar la expansión del virus que se obstaculizó por la negativa de muchos infectados a revelar a las personas con las que se habían reunido (Stolberg y Weiland, 2020a; Mazzei, 2020).

Ante las declaraciones de los científicos, el presidente cambió de táctica: seguir el avieso ejemplo del gobernador de Florida (el nuevo epicentro de la pandemia) de ocultar o manipular las estadísticas y

despedir a los funcionarios que le contradigan. En un *tuit* Trump adujo: “Si no se hacen diagnósticos no habría casos. Si parásemos los diagnósticos de inmediato tendríamos muy pocos casos, si los hubiese”. En el discurso en Tulsa Trump exclamó: “le he dicho a mi gente que pare de dar información sobre los casos del COVID-19”. Fauci ripostó que las infecciones adicionales eran las responsables del incremento (Stolberg y Weiland, 2020a). Esto fue ratificado por un estudio que mostró que, en promedio de todos los estados, el aumento de casos entre inicios de junio a fines de julio había sido del 215 %, mientras que los diagnósticos habían crecido solo el 80 %; el resto —el incremento real— era del 135 % (Conlen, 2020). En una entrevista de *Fox News* hecha por Chris Wallace, quien repetidamente confrontó a Trump con estadísticas, este respondió con embustes: insistió que el virus desaparecería “porque yo he estado más correcto que nadie”; cuando Wallace le dijo que la tasa de mortalidad estaba ascendiendo en Estados Unidos, el presidente evadió la pregunta, culpó a China y tildó de “alarmista” a Fauci, a lo que este refutó que él era “realista” (Rogers, 2020). Pence igualmente distorsionó la verdad: a) aseguró que el presidente había actuado a tiempo, salvando muchas vidas y que había enviado todos los suministros necesarios a los estados; b) “hoy todos los cincuenta estados y territorios en nuestro país están reabriendo con seguridad y responsabilidad... hemos aplanado la curva (...) en 34 estados hay cierta estabilidad” (en la realidad, los casos estaban subiendo en el 58 % de los Estados, 41.113 en un solo día, y varios gobernadores habían paralizado la desescalada); c) además negó que hubiera una segunda ola del virus y d) afirmó falsamente “estamos mucho mejor que cuatro meses antes, incluso dos meses antes” (Qiu, 2020; Wolf, 2020b).

Fauci afirmó que la estrategia de la reapertura había fracasado en parte porque algunos infectados, sin saberlo, estaban expandiendo el virus y también porque muchos rehusaban hacer la cuarentena; como ya se mencionó, varios Estados estaban paralizando la desescalada o retornando a las restricciones (Mazzei y otros, 2020). A inicios de julio, Trump volvió “a la carga” asegurando que el 99 % de los nuevos casos eran “totalmente inofensivos”, lo cual basó en una tasa de mortalidad del 1 % cuando, en realidad, era del 4,5 %, además despreció cientos de miles de muertes, el sufrimiento de todos los hospitalizados y los efectos dañinos del virus, a menudo permanentes; peor aún, su

información falsa levantó la expansión del virus. Además, aseveró que Europa estaba siguiendo las enseñanzas de Estados Unidos respecto al virus, pero a inicios de agosto, los casos estadounidenses eran cinco veces todos los casos combinados en Europa, Canadá, Japón, Corea del Sur y Australia, un área que tiene más del doble de la población estadounidense (Rabin y Cameron, 2020; Leonhardt, 2020).

La peor acción trumpista de ocultación, a fin de dar la impresión de que la pandemia estaba controlada, fue la orden de que los hospitales dejaran de reportar los casos y muertes al CDC y pasaran directamente la información a la Secretaría de Salud dirigida por un incondicional del presidente¹³ y que no estaría obligada a dar las cifras al público. Por la enorme crítica recibida provocada por esta decisión, al día siguiente Trump rescindió la orden (Stolberg, 2020d). El desempeño desastroso del presidente frente a la pandemia ha provocado que muchos republicanos prominentes tomen la actitud contraria (entre ellos McConnell), apoyando el uso de máscaras y el distanciamiento, aprobando los consejos de Fauci y afirmando que el virus no desaparecerá hasta que se descubra una vacuna efectiva (Burns y otros, 2020).

La compañía Moderna, con mil millones de dólares en apoyo federal, anunció en mayo que estaba probando una vacuna que podría estar lista a fines de 2020, pero los científicos estaban preocupados que el apuro comprometiese su efectividad o fuese dañina (Grady, 2020). En junio, Fauci prometió al Congreso de Estados Unidos, que él no permitiría que una vacuna saliese al mercado sin antes comprobar que sea segura y efectiva (Stolberg y Weiland, 2020). Un panel de expertos entrevistado a fines de junio, advirtió que la vacuna tomaría al menos dieciocho meses (Mukherjee, 2020). Pero Trump repetidamente ha afirmado que se descubrirá la vacuna en tiempo récord y que no habrá que hacer todas las pruebas requeridas. El jefe de la Administración Federal de Medicinas y Alimentos (FDA), Stephen Hahn, enseguida dijo que podría aprobar el uso de la vacuna como emergencia. Hahn fue nombrado por Trump a pesar de un conflicto de interés porque estaba en el consejo de Moderna y tiene diez millones de dólares en acciones de la compañía Sanofi que elabora otra vacuna (LaFraniere, 2020b).

Pescando en río revuelto: Los beneficiarios de la pandemia

El expresidente Barack Obama ha calificado de “desastre absoluto y caótico” a la actuación de Trump durante la pandemia porque lo que ha perseguido es “en qué puede beneficiarme” [y] al diablo con todo lo demás” (citado por Zeleny, 2020). Hay numerosos ejemplos de la ley del embudo por el presidente y su familia. Justo cuando se aprobó el primer paquete de rescate, Trump rehusó prometer que su propia compañía no se beneficiaría del mismo (Derysh, 2020). Él ha hecho propaganda a una medicina contra el paludismo (hidroxicloroquina) como preventiva contra la COVID-19, aunque no hay prueba de su efectividad¹⁴, peor aún, es muy riesgosa para los enfermos del corazón, riñones e hígado. Más de 40.000 profesionales sanitarios recetaron la medicina a un 90 % de la población que la solicitó, disparando las ventas cuarenta y seis veces, lo cual provocó una escasez mundial de la droga y dejó desamparados a millones de enfermos de malaria, lupus y artritis reumática (Gabler y Keller, 2020).

Trump después informó que estaba tomando dicha medicina, por lo cual fue criticado por los médicos y tomado como una irresponsabilidad (Karni y Thomas, 2020). Se reportó que el presidente tenía inversión en acciones de la empresa farmacéutica productora (Dicker, 2020). Además, procuró un acuerdo entre los grandes productores mundiales de petróleo para revertir la caída en su precio inducida por la pandemia; este acuerdo no beneficia a los consumidores estadounidenses, sino a la industria petrolífera, el 90 % de las contribuciones políticas van al presidente y al Partido Republicano (Krauss, 2020). Su hijo, Eric Trump, quien está cargo del lujoso hotel de la compañía en Washington que pertenece al Gobierno Federal, usando su influencia, pidió una reducción de la renta mensual que debe abonar (Dzhanova, 2020)¹⁵.

Jared Kushner, yerno y asesor clave de Trump, organizó un equipo para conseguir máscaras, ventiladores y desinfectantes, con el fin de enviarlos a aliados poderosos y familiares del presidente, interfiriendo con esa labor que había sido asignada a la Agencia Federal para enfrentar desastres (FEMA) que debería adquirirlos para los Estados y hospitales más necesitados (Collman, 2020). El director del equipo biomédico de la Secretaría de Salud, Rick Bright, denunció que había sido despedido por criticar la promoción de hidroxicloroquina y oponerse a presiones

políticas para otorgar contratos lucrativos a compañías de amigos de Kushner (Stolberg, 2020b). El presidente y su yerno se beneficiaron de un programa poco conocido del primer paquete de rescate que concedió retroactivamente recortes de impuestos pagados antes del COVID-19 a magnates de desarrollo inmobiliario: el 82 % del fondo fue a los que ganan más de un millón de dólares anuales; otro recorte impositivo favoreció a corporaciones con ingresos de más de veinticinco millones de dólares anuales. Kushner y su esposa Ivanka Trump ganaron, en 2019, al menos treinta y seis millones de dólares producto, en su mayoría, de negocios inmobiliarios y hoteles del presidente, mientras eran asesores de la Casa Blanca; aunque se supone que los asesores deben de desprenderse de inversiones en compañías cuando implican un conflicto de interés, la pareja no lo ha hecho (Panpenfuss, 2020). Desde que comenzó la crisis económica, a mediados de marzo hasta mediados de mayo, la riqueza de los multimillonarios creció un 15 %, con quince de ellos nuevos en el exclusivo club (Kristof, 2020a). Un juez federal ha aprobado una demanda contra Trump, sus tres hijos y su compañía por enriquecerse de forma fraudulenta estafando a personas pobres y vulnerables que invirtieron en uno de sus negocios sucios (Orden, 2020).

La secretaria de Educación y millonaria republicana Betsy DeVos, usó 30.000 millones de dólares del primer paquete de rescate destinados a escuelas públicas, especialmente ubicadas en barrios pobres, para ayudar a colegios y universidades privadas en áreas afluentes, por otra parte, bloqueó una condonación de deudas a estudiantes engañados por universidades (Green, 2020a, 2020b). El jefe del Comité de Inteligencia del Senado, el republicano Richard Burr, vendió 1,7 millones de dólares en acciones justo antes de pronunciar un discurso atemorizador sobre el virus y que cayese la Bolsa de Valores; también lo hicieron la senadora republicana Kelly Loefflers y su esposo (ambos multimillonarios y donantes al Partido Republicano) después de recibir información confidencial de oficiales de sanidad sobre la gravedad del virus (Lipton y Fandos, 2020; Haberman y otros, 2020).

Un centenar de grandes corporaciones tomaron préstamos destinados a pequeños negocios sin obligación de devolverlos, entre ellas, la cadena de hoteles de lujo Ashford Inc. dueña del Hotel Ritz Carlton de Atlanta que se embolsó cuarenta millones de dólares y la cadena de restaurantes

de bifes Ruth’s Chris que recibió veinte millones de dólares (Smialek y otros, 2020a). Por el contrario, la mayoría de los dueños de pequeños negocios que solicitaron los préstamos fue relegado, especialmente los afroamericanos e hispanos, dicha inequidad agotó el fondo en solo trece días y hubo que aprobar otro adicional (Flitter, 2020).

El secretario del Tesoro, Mnuchin, advirtió a las fraudulentas corporaciones que deberían devolver los préstamos o sufrir las consecuencias legales, pero aquellas lo han desafiado e incluso han revelado a sus accionistas que tenían otros recursos de crédito disponibles lo cual violó las normas para recibir dichos préstamos (Rapepport y McCabe, 2020). Los grandes bancos privados han dado preferencia a sus clientes con cuentas mínimas de veinticinco millones de dólares para, fácilmente, obtener préstamos destinados a pequeños negocios comparados con los clientes regulares; todos los clientes millonarios del Chase obtuvieron préstamos mientras que los regulares solo en un 7 % (Flitter y Cowley, 2020). Además, las entidades bancarias siguen pagando dividendos a sus accionistas, una práctica que provocó la bancarota de los bancos mayores en 2008. Un fondo federal para prevenir que hospitales quiebren por la pandemia, asignó cinco mil millones de dólares a veinte de los hospitales más ricos del país (con una mayoría de pacientes privados), incluyendo el sistema de salud privado de la ciudad de Providence que recibió 509 millones de dólares aunque tiene una reserva de 12.000 millones que invierte en la bolsa y genera pingües beneficios (los cabilderos redactaron los criterios para asegurarse que el grueso del dinero fuese a este tipo de hospitales ricos), mientras que los que asisten a pacientes de bajos recursos o pobres con Medicaid o sin seguro y que tienen magras reservas recibieron la mitad de los fondos de dicho programa (Drucker y otros, 2020). La cadena de hospitales HCA, una de las más poderosas del mundo, con 7.000 millones de dólares en utilidades y un valor de 36.000 millones, recibió 1.000 millones en fondos de rescate federal y pagó 26 millones de dólares a su jefe ejecutivo, a par que no proveyó equipo protector a su personal sanitario y amenazó con despidos si no aceptaban un congelamiento en sus salarios y otras concesiones (Silver-Greenberg y otros, 2020).

Los hospitales en las zonas más pobres neoyorquinas que sufren una incidencia mayor del virus, tienen el personal y las menores camas por habitante, carecen de equipo, tratamiento y medicamentos avanzados

y adolecen la mayor mortalidad; lo opuesto es cierto en los hospitales privados más ricos (Rosenthal y otros, 2020). Las mayores compañías privadas de seguro de salud tuvieron en el segundo trimestre de 2020, ganancias entre 2.000 y 6.700 millones de dólares debido a la posición por el virus de cirugías no urgentes y a menores consultas (Abelson, 2020).

El Gobierno Federal ha concedido 4.000 millones de dólares a laboratorios para desarrollar una vacuna (entre ellos Novavax que nunca ha elaborado una) y se ha negado a revelar quiénes son los beneficiarios, cómo se han escogido y los detalles de los acuerdos (Thomas, 2020). La industria de los cruceros continuó enviando barcos después de recibir la advertencia del CDC de no zarpar y conocer de contagios y muertes en sus barcos, los cuales mantuvieron en secreto (Miami Herald, 2020). Los granjeros de algodón han recibido subsidios federales equivalentes a treinta y tres veces de lo que perdieron en la guerra de tarifas trumpistas¹⁶, algunos cobraron millones de dólares en subsidios a pesar de un tope de 250.000 dólares; los 28.000 millones de dólares otorgados a los agricultores por COVID-19 se han concentrado en estados clave para la reelección de Trump (LaFraniere, 2020a).

Un par de operativos republicanos vendieron millones de dólares en suministros de COVID-19 a estados y municipios, pero nunca los entregaron. Un fraude por cuarenta y cinco millones de dólares envolvió la venta de siete millones de máscaras con una ganancia del 400 % (Rashbaum, 2020). Estos ejemplos de robo, fraude, corrupción y avaricia cunden entre gente amoral que acapara papel higiénico y otros productos, mientras que el mercado sube los precios de forma exorbitante (algunos hasta el 1.662 %) a los ventiladores, las máscaras y los desinfectantes. La retórica de que “todos estamos juntos frente al virus” no se confirma en la práctica, así, los ricos abandonaron sus residencias en ciudades con alta incidencia del virus: en New York, casi medio millón, el 1 % de ingreso superior, se marchó a propiedades en áreas con menos casos del virus, mientras que una enorme mayoría, un 80 % del ingreso menor, se quedó (Quealy, 2020).

Los paquetes de rescate: la batalla demócrata para hacerlos más equitativos

Hasta el momento de terminar este artículo, se habían aprobado en el Congreso de Estados Unidos dos paquetes de rescate económico y uno estaba en discusión. El primero ascendió a 2,3 billones de dólares (casi tres veces el monto del paquete de 2009 para enfrentar a la Gran Recesión). Inicialmente, este paquete se concentró en ayudar a las grandes compañías, fueron los demócratas en ambas cámaras los que lucharon por conseguir fondos para los desempleados, los pequeños negocios, los hospitales, los trabajadores de salud, la asistencia alimentaria y una mayor suma en el pago individual a millones de estadounidenses; también reclamaron que hubiese una supervisión en la distribución de los fondos a fin de evitar que se usaran para aumentar la paga a los ejecutivos o la recompra de acciones como ocurrió con el paquete de 2009.

La senadora demócrata Elizabeth Warren clamó: “No estamos aquí para crear un fondo que ayude a Donald Trump y su familia o al Departamento del Tesoro para darle dinero a sus amigos” (citada por Derysh, 2020). Mitch McConnell acusó a la oposición de entrar en juegos políticos y Trump alentó el rechazo de las propuestas demócratas y la toma de una decisión rápida. El pago de seiscientos dólares por semana a los desempleados, adicional a los beneficios financiados por los Estados, fue opuesto por republicanos como el senador multimillonario Rick Scott de Florida quien alegó que sería un desincentivo para regresar al trabajo¹⁷.

Pero la urgencia de aprobar el paquete y una retirada temporal de las negociaciones por parte de los demócratas consiguieron concesiones de estos, aun así la mayor ayuda se otorgó a las grandes corporaciones y hubo múltiples problemas: el 22 % se concedió a dichas corporaciones en préstamos subsidiados; el 13 % en un pago único de 1.200 dólares a los ciudadanos que ganan menos de cierto nivel de ingreso (su entrega se demoró porque Trump ordenó que apareciera su nombre en los cheques, como si él hubiera pagado por ellos, una descarada propaganda para su reelección); el 11 % en préstamos para pequeños negocios (sólo el 26 % los recibió, la mayor tajada se la llevaron las grandes corporaciones); el 11 % para los desempleados (este programa terminó a fines de julio); el 6% para estados y municipios (que cargaban con

el mayor peso de la batalla contra el virus) y el 5% para los hospitales que confrontaban la pandemia, obviamente insuficiente (CARES Act, 2020; Cochrane y Fandos, 2020). Los más necesitados no recibieron ayuda ya sea porque no se dirigía a ellos o no sabían que existía o cómo llenar las solicitudes. En la eventual recuperación económica ellos serán los últimos que se beneficiarán.

Los afroamericanos e hispanos dueños de pequeños negocios han sido los más perjudicados por la crisis económica que el resto. De esta manera, estos negocios fueron cerrados respectivamente en un 41 %, un 32 % y un 17 %. Esto se debe a que los primeros trabajan en las industrias u ocupaciones que han sido más golpeadas por el cierre provocado por la pandemia y la crisis económica, como restaurantes y transporte, a más de que tienen menos capital y, por tanto, se quedaron más rápido sin efectivo. Los dos grupos étnicos citados, además, se beneficiaron menos de los paquetes de rescate: solo el 12 % de los afroamericanos e hispanos recibieron fondos que solicitaron comparados con la mitad de todos los pequeños negocios (Leatherby, 2020). Rompiendo todos sus récords de falacias, Trump afirmó, en julio de 2020, que era el presidente que había hecho más por la “América negra”, con la posible excepción de Abraham Lincoln; en ese mismo mes, un entrevistador le preguntó que si también superaba al presidente Lyndon B. Johnson que auspició la Ley de Derechos Civiles de 1964 y Trump respondió afirmativamente.

El primer paquete pronto resultó insuficiente. Un segundo se aprobó por 484.000 millones dólares para asistir a los pequeños negocios, a los hospitales y a los diagnósticos del virus, los dos últimos impulsados por los demócratas. En mayo, los demócratas en la Cámara de Representantes aprobaron un tercer paquete por tres billones de dólares, el cual incluía un billón en ayuda a estados y municipios y el resto para un segundo pago individual a los contribuyentes, los desempleados y para la asistencia alimenticia. El presidente del banco de la Reserva Federal, Jerome Powell, respaldó la necesidad de dicho paquete para evitar un daño irreparable a la economía y al empleo¹⁸, agregando que corresponde al Congreso porque ya el banco había hecho todo lo que podía (Smialek y otros, 2020b). Los republicanos se opusieron; Trump dijo que no estaba dispuesto a ayudar a los Estados gobernados por demócratas y que vetaría el paquete, y el senador

republicano de Florida, Rick Scott, cuestionó por qué Estados que estaban financieramente bien deberían auxiliar a aquellos que tenían problemas fiscales. Sin embargo, el senador republicano por Utah, el moderado Mitt Romney, excandidato a la presidencia, ripostó que no solo aquellos que votaban en favor de los demócratas tenían problemas, puesto que había Estados que votaban por republicanos y sufrían una situación grave, como Luisiana, Kansas y Kentucky.

La caída en picada de la Bolsa de Valores, a mediados de marzo (el Dow descendió más de 2.000 puntos), incrementó la presión sobre los republicanos para aprobar el tercer paquete. En mayo, McConnell declaró que no lo haría, al menos que se incorporase una cláusula bloqueando la responsabilidad por daños y perjuicios del Gobierno Federal y de las empresas, en caso de que la reapertura incrementara el número de muertes por la pandemia (Wilkinson, 2020). Pero el rebrote del COVID-19 y la exhortación de Powell que se necesitaba un tercer paquete, movió a los congresistas republicanos a tentativamente aceptar uno por un billón de dólares, un tercio del paquete demócrata y con medidas y equidad muy diferentes. Los republicanos exigían una moratoria en el impuesto a las ganancias de capital, una reducción del impuesto a la nómina pagada por los empleadores, más deducciones por gastos corporativos en comidas y entretenimiento y la imposición de límites a la responsabilidad legal por daños y perjuicios a los negocios; por el contrario, los demócratas demandaban ayuda a los estados y municipios, extensión del pago adicional de seiscientos dólares a los desempleados (rechazada de nuevo por los republicanos) y otros programas sociales (Rappeport y Smialek, 2020).

En julio, el secretario del Tesoro Mnuchin, presionó para aprobar el paquete, agregando al mismo 105.000 millones de dólares para financiar la reapertura escolar, pero las diferencias entre los dos partidos seguían imperturbables y había una gran división entre los republicanos, parte de los cuales se distanciaba de Trump por temor a perder sus escaños en noviembre. Dos exjefes del Banco de la Reserva Federal urgieron en otorgar ayuda a los estados y municipios advirtiendo que la resistencia republicana impediría la recuperación económica, mientras que el asesor económico de Trump, Kudlow, insistió en imponer un tope en la ayuda a los desempleados y McConnell declaró que el Senado no aprobaría el paquete si no incluía fuertes frenos a la responsabilidad

legal del Gobierno (Rappeport y Fandos, 2020). Los ultraconservadores, liderados por Ted Cruz, se oponían al paquete, aduciendo que aumentaría el déficit fiscal, lo cual no les preocupó cuando aprobaron la reforma tributaria de 2017 (Hulse, 2020).

El paquete republicano, de fines de julio, redujo de seiscientos a doscientos dólares semanales la ayuda adicional a los desempleados y negó a Trump su petición de 1.750 millones de dólares para construir un nuevo edificio del FBI que está a una manzana de distancia de su hotel en Washington D.C., y también su reclamo de una suspensión al impuesto sobre la nómina. Trump lo criticó y boicoteó las conversaciones diciendo que prefería a un paquete frugal que enviase un segundo pago a todos los ciudadanos, “el resto realmente no me importa” (Cochrane y Tankerley, 2020b). La propuesta demócrata fue calificada por McConnell como un “manifiesto socialista multibillonario” (Cochrane and Tankersley, 2020a).

En agosto, aprovechando que los congresistas se habían ido de vacaciones de verano, Trump dictó una resolución ejecutiva, muy confusa y de legalidad dudosa, en la que suspendió por el resto del año el impuesto a la nómina de los empleadores (a las pensiones de seguridad social y al Medicare) y a los empleados que ganan menos de 100.000 dólares anuales, una medida rechazada por los congresistas demócratas y republicanos por no ayudar con la crisis y denunciada por la Academia de Seguridad Social de Estados Unidos como un intento de dismantelar ambos programas y violar su repetida promesa de protegerlos (NASI, 2020). La resolución, además, extendió el pago extra a los desempleados reduciéndolo de seiscientos dólares semanales a cuatrocientos, de los cuales trescientos pagados por el Gobierno Federal y cien por los Estados, pero deberá ser aceptado por estos, los cuales carecen de recursos para llevarlo a cabo. Por último, extendió los desahucios y el pago de préstamos a estudiantes (se juzga que los dos últimos serán inefectivos). La resolución excluyó las ayudas a los Estados y municipios, a la reapertura de las escuelas y a los pequeños negocios. Todas las medidas citadas requieren constitucionalmente la aprobación de fondos por el Congreso, pero para financiar la ayuda al desempleo, Trump apropió 44.000 millones de dólares del programa federal de asistencia a los desastres naturales, los cuales se vaticina se agotarán en cinco semanas y causarán un déficit para enfrentar a hu-

racanes y terremotos (Cochrane y otros, 2020; Lieber y Cowley, 2020). Al cerrarse este artículo, se debatía si los congresistas retornasen de sus vacaciones para aprobar un paquete más adecuado con financiamiento satisfactorio.

Se ha probado la distribución inequitativa de los paquetes anteriores: Estados con pequeñas poblaciones y escasos contagios recibieron una “porción muy grande del pastel” (Hawaii, 2 millones de dólares por cada caso positivo y Alaska 3,4 millones), mientras que Estados más grandes y con mayor número de casos habían recibido porciones muy pequeñas: New York 24.000 dólares por caso y New Jersey 27.000 dólares (Munvihill, 2020). El primer paquete prohibió a Trump y a su familia, al vicepresidente y a los congresistas recibir ayuda del fondo. Sin embargo, de los cinco miembros que integran el comité congresista de vigilancia para evitar que eso ocurra, solo se había nombrado uno a fines de abril, el cual reclamó infructuosamente al Banco de la Reserva Federal que le suministrase toda la información necesaria a fin de ejecutar la ley. Por el contrario, Trump despidió al inspector nombrado para controlar la integridad del paquete y designó, para la función, a un abogado de la Casa Blanca como inspector del Tesoro. Ya se ha demostrado como Trump, su familia y amigos se han beneficiado del fondo de rescate.

El triaje: teoría y práctica trumpista

El triaje (*triage*) se utiliza en situaciones de graves desastres o enfermedades, para maximizar recursos insuficientes dando prioridad a los pacientes según su grado de necesidad, comparado con la probabilidad de beneficiarse o sobrevivir. Teóricamente, en la pandemia, la decisión de quién tiene acceso a exámenes de diagnóstico, ventiladores y unidades de cuidados intensivos debe ser objetiva y ética, nunca influenciada por riqueza, raza, poder, género, edad o conexiones, pero precisamente estas son las razones en un mundo trumpista que desdén a los pobres, incapacitados, mujeres, ancianos, afroamericanos, hispanos e inmigrantes¹⁹. Políticos, hombres de negocios, atletas y celebridades han tenido acceso inmediato a la prueba del COVID-19, entre ellos, los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart y Rand Paul, a través de la oficina médica financiada por impuestos que asiste exclusivamente a los congresistas en Washington (Paul tuvo la osadía

de no aislarse antes de saber el resultado de la prueba). Igual prerrogativa recibieron los alcaldes de Miami y del Condado de Miami-Dade, junto con sus esposas, a costa de personas infectadas que necesitan desesperadamente dicha prueba. Hay también disparidades entre los poderosos: mientras que el presidente, el vicepresidente, el staff de la Casa Blanca y los visitantes de Trump reciben exámenes diarios con rápidos resultados para detectar el virus, en el Senado solo pueden ser examinados los que muestren señales de contagio.

Los afroamericanos e hispanos padecen tres veces la probabilidad de infectarse por el virus que los blancos y su probabilidad de morir es el doble (Opepi, 2020). Las razones son obvias: sufren una mayor incidencia de pobreza, disparidades económicas (ingreso menor al promedio, mala vivienda y alimentación), una gran cantidad trabaja en ocupaciones de alto riesgo (transporte, limpieza, comidas), tienen menor acceso a la atención de salud y mayor proporción de enfermedades crónicas. Mientras que los hospitales privados tienen grandes reservas y contactos políticos para obtener equipos de forma rápida, aquellos que atienden a los más necesitados y enfermos carecen de lo más indispensable. En los tres meses iniciales del COVID-19, las personas de mayor edad sufrían una fuerte incidencia y mortalidad por el virus, pero con la reapertura en el verano esto cambió y las personas entre veintidós y cuarenta y cuatro años pasaron a ser los más afectados, debido a que este grupo frecuenta bares, restaurantes y tiendas (a menudo sin portar máscaras y guardar la distancia social) mientras que los de la tercera edad continúan el confinamiento y se protegen mucho más (Bosman, J. & S. Mervosh, 2020).

Se reporta que el virus afecta más a los hombres que a las mujeres, pero la mayoría de los trabajadores de salud son enfermeras y se encuentran más expuestas. Igualmente afecta más a los de menor ingreso: el 39 % de los hogares que ganaban 40.000 dólares o menos al año, perdieron sus trabajos, versus el 13% que recibía 100.000 dólares o más (Smialek, 2020a). Otra consecuencia ominosa de la crisis en Estados Unidos es el incremento de la desnutrición (los afroamericanos sufren el doble por inseguridad alimenticia que los blancos) por la escasez de los bancos de alimentos frente a la demanda creciente. Una encuesta de la Institución Brookings encontró que un quinto de las madres con niños se queja que sus hijos no tienen alimentos suficientes, tres veces más

que en 2008 en la cima de la Gran Recesión. En julio de 2020, había 43 millones recibiendo las estampillas para alimentos; si efectivamente no se extiende la ayuda extra a los desempleados, el número de estos se incrementará.

El primer paquete de rescate incluyó un programa para suministrar alimentos a los niños que habían perdido sus comidas por el cierre de las escuelas, pero dos meses después, sólo un 15 % de ellos los había recibido y dieciséis Estados no tenían la aprobación federal para dicho programa (DeParle, 2020a, 2020b). La pandemia también ha provocado una avalancha de despidos porque los desempleados no pueden pagar las rentas de sus viviendas y son puestos en la calle (Mervosh, 2020). Otra disparidad existe entre los Estados predominantemente urbanos (con alta incidencia del virus) y los rurales. Los gobernadores republicanos de Arkansas, Dakota del Norte y del Sur, Iowa y Nebraska no tomaron medidas contra la COVID-19 pues creían que no serían afectados, uno de sus gobernadores declaró que las medidas violaban la libertad individual y que la dispersión rural sería un escudo. El 10 de abril, tres cuartos de todos los condados rurales ya estaban infectados y sufrían una grave escasez en los hospitales, equipo y personal para enfrentar la pandemia. Por último, hay un debate sobre quiénes tendrán prioridad cuando la vacuna esté lista; un ordenamiento preliminar del CDC incluye a los funcionarios y trabajadores vitales sanitarios y de seguridad, así como las personas mayores y con condiciones crónicas que las hace más riesgosas, pero no hay acuerdo respecto a los grupos étnicos más afectados (afroamericanos e hispanos) y la Casa Blanca se opone a dichas prioridades (Twohey, 2020).

Reacción ciudadana a la fracasada política trumpista frente al COVID-19 e impacto en su reelección

Este artículo demuestra, con copiosa evidencia, la directa responsabilidad de Trump en cinco millones de contagiados y 163.000 fallecidos por la COVID-19 en Estados Unidos hasta mediados de agosto: minimizó la severidad de la pandemia y demoró meses en reaccionar, a pesar de tener información, estudios y el consejo previo de los expertos. Solo actuó cuando se desplomó la Bolsa de Valores que amenazó su reelección; no diseñó ni aplicó un plan federal de ámbito nacional con la

asistencia de epidemiólogos, que ordenara el cierre de establecimientos, el confinamiento de las personas, el uso de máscaras, de desinfectantes y de distanciamiento social, así como los diagnósticos masivos y el trazado de los contactos de los infectados, por el contrario peleó con los Estados, criticó a varios gobernadores pioneros en las restricciones y, al final, le pasó la responsabilidad a ellos a pesar de declarar que tenía poder total sobre los Estados. Además, sentó un mal ejemplo en la población, al igual que el vicepresidente, al negarse a usar máscara en sus comparecencias televisivas y visitas públicas; también hizo propaganda, contra toda la evidencia científica, a una medicina que afirmó era un preventivo del virus y sugirió tomar o inyectarse desinfectante para evitarlo, sin preocuparle los efectos nocivos de dichos consejos en la población.

Trump y sus seguidores apoyaron el darwinismo social, en la disyuntiva entre la muerte y la economía apoyaron a la segunda sin importarles los nefastos efectos, especialmente entre las personas mayores cuyas muertes se justificaron como un sacrificio necesario en aras de la economía. Los paquetes de rescate fueron inequitativos, los republicanos obstruyeron medidas para ayudar a los desempleados, a los grupos étnicos más golpeados por el virus y por la crisis económica. Trump, su familia, amigos y aliados republicanos, así como grandes corporaciones, se aprovecharon de los fondos de rescate para proteger y aumentar sus riquezas.

Preocupado por la caída del mercado de valores y el alto desempleo, el presidente urgió a los gobernadores a que reabrieran sus estados a pesar de que en la mayoría de ellos la curva del virus estaba en ascenso, solo un porcentaje ínfimo de la población había sido infectada por el virus y sin ordenar diagnósticos masivos, el trazado de los contagiados con otras personas y la seguridad de contar con suficientes ventiladores y camas de cuidados intensivos en los hospitales. Esta decisión la hizo a contrapelo de la advertencia de los expertos que una desescalada temprana generaría el resurgimiento del virus y una crisis económica peor que la original. Tanto el presidente como el vicepresidente utilizaron múltiples argucias para negar que la reapertura provocó un rebrote en la mayoría de los Estados.

En su campaña reelectoral, Trump convocó a reuniones políticas masivas de los republicanos, lo cual suscitó un alza de los contagios y

defunciones y esto no fue óbice para continuar con su fatídica campaña. A través de meses de esta tragedia nacional, Trump jamás mostró empatía con los afligidos por el virus y sus familias, por el contrario, fomentó el odio y la división nacional, atacando a todos los que percibió como enemigos, enviando tropas federales a reprimir manifestaciones pacíficas y culpando de sus propios yerros a oponentes y a los medios de comunicación.

Desechando la evidencia anterior y con su habitual altanería, Trump se vanaglorió: “El pueblo americano cree que he manejado muy bien el virus, vean las encuestas”. Después de tomar las primeras medidas a mediados de marzo, los estadounidenses hicieron lo usual en crisis terribles y el apoyo a Trump subió de un 44 % a un 47 % y un 52 %. No obstante, esto era muy inferior al 90 % que aprobó a George W. Bush después del 11S; 89 % a Bush padre durante la guerra contra Iraq; 87 % a Harry Truman al finalizar la Segunda Guerra Mundial y 85 % a Franklin D. Roosevelt después de entrar en dicha guerra. También superior es el porcentaje (75 % a 79 %) que apoyó a los dirigentes de Austria, Dinamarca, Holanda y Nueva Zelanda, los cuales tomaron medidas tempranas que les permitieron reabrir la economía con seguridad. Más aún, a mediados de abril, la aprobación a Trump descendió un 46 % por dos razones, una económica y otra la conducta innoble del presidente. Respecto a la primera, el incremento del desempleo a diecisiete millones, equivalente a un 13,4 % de la fuerza laboral²⁰ y la advertencia de la directora del FMI que esta crisis será peor que la de 2007-2008 (ahora se estima que cuatro o cinco veces peor) y la caída del PIB en un 11 % en el segundo trimestre de 2020. El presidente del Banco de la Reserva Federal Powell expresó que el desempleo era el mayor en noventa años y que se mantendría alto por años. Se predijo que la economía se contraería a un 7,3 % en 2020 si se dominase el virus y el 8,5 % si no se contuviese, las cifras actuales fueron peores que las predicciones (Smialek y Rappeport, 2020). La segunda razón fueron las comparecencias televisivas diarias del presidente en las que criticó a gobernadores y alcaldes que disientían con él, aumentó la polarización del país en vez de procurar su unidad frente al peligro común, despidió al inspector general que recién había nombrado supervisor del paquete económico, se auto-elogió de sus altos “ratings” televisivos en medio de la mortalidad creciente, cometió errores factuales, se contradujo o desdijo constantemente e incurrió en desatinos reveladores de su

vasta ignorancia, como decir que evitó miles de millones de muertes en Estados Unidos que solo tiene 330 millones de habitantes, pero otros peligrosos cuando sugirió que la gente tomase o se inyectase desinfectantes que irían a los pulmones y matarían al virus y, por supuesto, también a las personas²¹.

Una importante pregunta es cómo el deplorable desempeño de Trump respecto a la pandemia, la economía y contra las protestas pacíficas por el asesinato de un afroamericano por policías en Mineápolis afectarán a su reelección (66% de la población desaprueba la manera en que el presidente manejó estas crisis). Cuatro encuestas, en la primera mitad de abril, mostraron que el candidato demócrata y expresidente Joseph Biden triunfaría por once puntos sobre Trump, los cuales aumentaban a trece puntos respecto a la pandemia. A comienzos de junio varias encuestas indicaron que Biden mantenía once puntos de ventaja, también trece respecto al manejo de la pandemia, veinte entre blancos con una licenciatura y veinticinco respecto a las mujeres (Russonello, 2020; Burns y Haberman, 2020; Cohn, 2020a; Grynbaum y Haberman, 2020). A fines de junio, hubo tres encuestas: a) una, de la ultraconservadora Fox News, dio solo el 38 % del voto a Trump versus el 50 % a Biden (Blanton, 2020); b) otra, del New York Times, dio respectivamente el 36 % y el 50 % debido al pésimo manejo trumpista de la pandemia y de las protestas pacíficas contra el racismo (según esta encuesta, Biden contaba con el 79 % del voto afroamericano, el 64 % del hispano, el 59 % de las edades entre los dieciocho y el 34, 55 % del femenino y 52% entre los de 65 y más años; Burns y otros, 2020) y c) la tercera indicó que el 6 % de los que votaron por Trump en los Estados más reñidos en 2016, no lo harían en 2020: entre el 78 % y el 86 % consideraban que Biden sería un mejor presidente porque haría una mejor labor en unificar a la Nación, en relaciones raciales y en manejar la pandemia (Cain y otros, 2020). A mediados de julio, la encuesta Gallup dio el 38% a favor de Trump y 57 % a Biden (Easten, 2020). Por último, The Economist (2020) proyectó que Biden obtendría 337 votos del colegio electoral (se requieren 270 para ganar) dando una probabilidad del 86 % al candidato demócrata frente a un 14 % a Trump, “el mayor margen ganador desde la victoria de Barack Obama en 2008”. Trump ha eliminado todas estas encuestas y tildado las predicciones de falsas, como lo fueron en 2016, pero la ventaja de Biden es de dos puntos digitales, muy superior a la que tenía Hilary

Clinton, alegando que él tiene otras que le dan la victoria por amplio margen, sin ofrecer prueba alguna (Rogers, 2020)²². Varios prominentes republicanos han anunciado que no votarán por Trump y algunos que lo harán por Biden, por ejemplo, el expresidente George W. Bush, el exsecretario de Estado Colin Powell, el excandidato a la presidencia y actual senador Mitt Romney, la viuda del excandidato presidencial y senador John McCain, el exsecretario de Defensa de Trump, James Mattis, y varios militares de alto rango (Martin, 2020b). Un grupo de republicanos contra Trump (Lincoln Project) está diseñando y financiando anuncios televisivos que lo critican con astucia. Según las encuestas, los candidatos republicanos al Senado están a la zaga de sus contrincantes demócratas, incluso en los estados que Trump ganó en 2016 (Cohn, 2020b). Antes, los republicanos apoyaban de forma servil a Trump porque de lo contrario podrían perder las elecciones, ahora están preocupados que el descenso presidencial en el apoyo popular sea una rémora para mantener sus escaños.

Otra pregunta es si habrá una recuperación económica lo suficientemente rápida y fuerte para ayudar al mandatario. Un creciente número de economistas cree que, aún si hubiese una reapertura pronta y sin una segunda ola del virus, la recuperación sería lenta y oscilante; una visión sostenida en mayo por el jefe del Banco de la Reserva Federal Powell: “La economía se recobrará, pero tomará tiempo, podría ser hasta el fin del año 2021” (Smialek, 2020b). La oficina presupuestal del congreso proyectó que la recuperación plena tomaría años, asumiendo que el crecimiento retornase en 2020. En julio, después de la reapertura auspiciada por Trump y el subsiguiente rebrote, Powell hizo un vaticinio más pesimista: “Una segunda ola forzaría a la gente a encerrarse de nuevo con una caída en la confianza (...) La recuperación no ocurrirá hasta que la gente crea que es seguro retornar a un amplio abanico de actividades” (Stolberg y Weiland, 2020b). En el segundo trimestre de 2020, la economía se contrajo un 9,5 %, la mayor caída en récord, equivalente a menos el 33 % anualizado (más del doble que durante la Gran Recesión), la cual esfumó casi cinco años de crecimiento sostenido (Casselman, 2020) La reapertura temprana ha provocado un rebrote nacional del virus con consecuencias adversas para la salud y la economía y, también, debería serlo para la reelección de Trump.

Biden ha advertido que, si Trump cree que perderá las elecciones, podría posponer la fecha de las mismas o recurrir a cualquier ardid para ganarlas (Cillizza, 2020). Un equipo en la Universidad de Georgetown ha estudiado varios y probables escenarios de dichas artimañas (Epstein, 2020). Un primer escenario es que Trump prohíba la votación por correo porque, aduce, provocaría “la mayor manipulación electoral en la historia”. Esta última aseveración fue calificada de falsa por la compañía *Twitter*, lo que provocó un desplante de Trump, asegurando que regularía o cerraría las redes sociales por violar su “libertad de expresión” (léase mentir con impunidad); seguidamente dictó una orden ejecutiva (probablemente ilegal) eliminando la protección por demandas por daños y perjuicios contra *Twitter*. Desde 2012, el presidente ha alegado fraude electoral en setecientos trece casos, especialmente durante la campaña de 2016 y los primeros siete meses de 2020 (Baker, 2020f). Interrogado el fiscal general William P. Barr sobre si creía que la elección sería fraudulenta, afirmó: “Si hay votación masiva por correo, eso aumentaría substancialmente el riesgo de fraude” (LaFraniere y Qiu, 2020).

La Corte Suprema anuló una decisión de un juez federal que, por la COVID-19, legitimaba los votos en la primaria de Wisconsin enviados por correo una semana después de celebradas aquellas, resultando en miles de votos anulados. Trump tildó, falsamente, de ilegal dicha votación en Michigan y Nevada y amenazó que no les enviaría ayuda federal por la pandemia a esos estados (Wines, 2020). No solo el presidente ha rechazado otorgar ayuda al sistema público postal del país a fin de que pueda conducir la votación masiva (los demócratas han propuesto 25.000 millones de dólares de ayuda), sino que ha politizado el servicio postal, nombró jefe de Correos a Louis DeJoy un republicano que donó 1,5 millones de dólares a la campaña de Trump en 2016 (la esposa de DeJoy tiene acciones en UPS, la principal competidora del servicio público), el cual pretende privatizar el servicio postal y ordenó suspender el pago de tiempo extra a los carteros abrumados por el exceso de trabajo (Shear y Vogel, 2020). Una variación de este primer escenario es que, si la mayoría de la votación es por correo, por temor a la pandemia, demore el conteo de los votos (hay que abrir manualmente los sobres y escanear los votos lo cual retrasa el proceso); en aquellos estados donde la votación sea muy reñida, la tardanza podría ser aún mayor y Trump podría aprovecharse para aducir que ha habido fraude (Goldmacher, 2020).

Un segundo ardid sería que el fiscal general Barr –que apoya incondicionalmente a Trump– anuncie una investigación criminal contra Joseph Biden, lo cual generaría votación en su contra o podría aplazar la elección. El tercer escenario sería que Trump declare un estado de emergencia y recurra a la Guardia Nacional e impida reuniones de diez o más personas. En junio, debido al asesinato del afroamericano George Floyd por un policía en Minneapolis, Minnesota, y las subsiguientes manifestaciones multitudinarias en todo el país (en su enorme mayoría pacíficas), incluyendo Washington D.C., Trump declaró “cuando empiece el vandalismo comenzaremos a disparar” (sus guardaespaldas lo habían encerrado en el bunker de la Casa Blanca para su seguridad y al día siguiente rodearon el recinto con un muro y otros obstáculos). Después Trump dio un ultimátum a los gobernadores y alcaldes de las ciudades que, si ellos no terminaban las protestas, enviaría a las tropas militares para hacerlo, a la par que ordenó a la Guardia Nacional que atacara a los manifestantes pacíficos en la capital con químicos irritantes y granadas de humo, a fin de que el mandatario pudiera salir de la Casa Blanca y caminar a una histórica iglesia cercana donde le sacaron fotos con una Biblia en la mano que estaba al revés. El ultimátum fue ampliamente criticado como una violación de la Constitución y a la democracia (incluyendo al obispo episcopal de la iglesia donde Trump se sacó las fotos) y provocó protestas masivas –el 54 % del pueblo apoyó a los manifestantes contra el 22% que se opuso– (Kristof, 2020b; Senior, 2020). En julio, Trump envió guardias federales en traje de combate, sin insignias, a reprimir manifestantes pacíficos en Portland usando gas lacrimógeno, hiriendo a varios y deteniendo a otros; el gobernador calificó esta acción de “un flagrante abuso de poder” y “ataque a nuestra democracia” (Olmos y otros, 2020). Trump afirmó que los agentes habían hecho un trabajo “fantástico” en Portland, acusó a los protestantes de ser “radicales de izquierda” y “anarquistas”, dijo que, si Biden ganaba la presidencia, el país se iría “al diablo”. Además, anunció que enviaría tropas para reprimir las manifestaciones pacíficas en otras ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago, New York, Detroit y Filadelfia (Baker y otros, 2020).

Una cuarta alternativa es que Trump posponga las elecciones debido al aumento de la pandemia, un ataque cibernético a las máquinas electorales u otro desastre real o inventado. El yerno del presidente y

su asesor principal, Kushner, fue interrogado si la postergación pudiera ocurrir y contestó: “No estoy seguro que puedo comprometerme a eso de una forma u otra” (Karni y Haberman, 2020), después del escándalo que generó, dijo que él no estaba implicado en ese asunto. A fines de julio, Trump envió un *tuit*: “Usando el voto por correo...2020 será la elección más fraudulenta en la historia. ¿Pospongamos la elección hasta que la gente pueda votar propiamente, seguramente y sin riesgos [por la COVID-19]”? (AFP, July 30, 2020).

Una ley federal de 1845, fija el día de las elecciones; el presidente no puede posponerlas, para ello necesitaría un cambio de la ley por el Congreso lo cual es imposible, porque la Cámara de Representantes tiene mayoría demócrata; además, la Constitución estipula que el presidente y el vicepresidente deben abandonar el cargo el 20 de enero y esto no puede cambiarse por una simple ley del Congreso (Burns, 2020). Un quinto peligro es que Trump pierda la elección por estrecho margen y clame que ha habido fraude, recuérdese que en la campaña de 2016 declaró que no aceptaría una victoria de Hilary Clinton. En la elección de 2000, el candidato demócrata Al Gore ganó el voto popular (como lo hizo Hillary Clinton en 2016) pero la decisión clave del Colegio Electoral estaba supeditada al resultado de votación muy estrecho y reñido en la Florida; hubo un largo recuento de votos y la Corte Suprema (entonces más balanceada ideológicamente que ahora) decidió a favor de George W. Bush.

Hoy la Corte tiene una mayoría conservadora y, si hubiese un problema similar, votaría por Trump (no obstante, en 2020, el presidente de la Corte John Roberts cambió su voto tres veces aliándose con los cuatro jueces progresistas en juicios importantes). En una entrevista llevada a cabo por *Fox News* el 19 de julio, Trump sugirió que podría no aceptar los resultados de las elecciones en caso de que perdiese (Rogers, 2020).

En el escenario más funesto, si a pesar de todo el análisis anterior, el presidente fuese reelegido, el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman (2020a), vaticina que en su segundo período Trump se convertiría en un autócrata²³. En el extremo opuesto del abanico ideológico, John Bolton (2020) augura “un peligro para la República”. Envalentonado con su victoria, Trump castigaría a todo el que se le oponga, pondría más obstáculos a la libertad de prensa, purgaría a todos los funcionarios que no lo apoyen y los substituiría por otros leales,

umentaría la división del país para su propio beneficio²⁴, trataría de imponer su voluntad sobre los estados y disolvería manifestaciones pacíficas, todo ello con el apoyo de los obedientes republicanos, sectas religiosas ultraderechistas, racistas y misóginas, grupos de predominio blanco y neonazis. Y, por supuesto, habría un recrudecimiento de la Ley del Embudo.

¿Por cuánto tiempo habría que sufrir esto? El propio Trump ha dicho un par de veces, supuestamente en broma, que “bajo las reglas normales, tendría que dejar la presidencia en 2024, así que puede ser que busque un tercer período”, lo cual está prohibido por la Constitución que fija un máximo de dos períodos (Político, 2019). John Bolton (2020) exconsejero nacional de seguridad, reveló en su libro que Trump le dijo al dirigente chino Xi que los estadounidenses querían eliminar el límite constitucional de dos períodos presidenciales. Recientemente Trump expresó que su presidencia podría “durar entre 9 y 13 años más” (Nuevo Herald, 2020). Un antecedente ominoso a esto son los casos de varios presidentes latinoamericanos elegidos democráticamente para un período, que luego cambiaron la ley o la Constitución para reelegirse varias veces convirtiéndose en autócratas.

NOTAS

1. En mayo, después que dos funcionarios de la Casa Blanca se contagiaron, Trump ordenó a todos usar máscaras, exceptuándose a sí mismo (Shear, 2020). En una visita a contagiados en la Clínica Mayo, el vicepresidente Pence no portaba máscara, aunque se exigía por la institución y todos los que le rodeaban las usaban; varios de sus guardaespaldas se infectaron; no fue hasta comienzos de julio, debido al rebrote del virus, que comenzó a usarla.
2. El Washington Post tiene un equipo que comprueba a diario las declaraciones de Trump y determina factualmente si son mentiras, llevando la cuenta del total de falsedades, véase el libro *Donald Trump and his Assault on Truth*.

3. Sobre cómo estas motivaciones determinan la política exterior de Trump, ver C. Mesa-Lago 2019.
4. Graham inmediatamente anunció que iniciaría una investigación sobre el asunto para desdecirse horas después (Wagner, 2020)
5. El presidente ha mentido repetidamente sobre su desempeño: 1) “Estamos diagnosticando a más personas por habitante que Corea del Sur, el Reino Unido, Francia, Japón, Suecia y Finlandia” (omitió a 24 países con una relación superior, como Alemania, Canadá y Suiza; y 2) El número de casos en Estados Unidos está cayendo “rápidamente en todo el país” (hay estados en que esto ha ocurrido como New York, pero lo opuesto es cierto en la mayoría de los estados (cifras de John Hopkins University).
6. Jared Kushner, que carece de todo conocimiento médico, aseveró que New York no necesitaba 30.000 ventiladores porque “yo soy más sagaz [que el gobernador] y he hecho mis propias proyecciones”.
7. Véase, C. Mesa-Lago, 2017.
8. Si Trump hubiese intentado imponer una reapertura y los estados se hubiesen negado, el conflicto hubiese ido a los tribunales federales e incluso a la Corte Suprema demorando la decisión por meses y dañando su reelección.
9. Los gobernadores se han quejado de que la escasez de exámenes de diagnóstico es el impedimento mayor para reabrir las economías. El de Virginia dijo que el presidente les había requerido una guerra biológica, pero sin enviarles los suministros esenciales para el combate. El líder republicano del Senado McConnell declaró que los estados solicitantes debían declararse en bancarrota en vez de recibir ayuda federal.
10. Pence afirmó que la terminación del equipo se debía al “tremendo progreso que hemos logrado” contra COVID-19, cuando en realidad ha ocurrido lo opuesto: el tremendo progreso de la pandemia.
11. Trump prohibió a Fauci testificar en la Cámara de Representantes porque tiene mayoría demócrata.
12. A mediados de abril, Trump envió un *tuit* pidiendo el despido de Fauci, pero no habló más de esto debido a la popularidad del experto. Según una encuesta del NYT, el 84 % de los votantes confían en la información ofrecida por Fauci y los científicos, el 90 % entre los demócratas y 75 % entre los republicanos.

13. Trump concedió diez millones de dólares a una compañía privada para que maneje la data base sobre casos y muertes y la entregue al gobierno.
14. El republicano Charlie Kirk, asistente de Donald Trump hijo, afirmó falsamente: “Se ha probado que dicha medicina es 100 % efectiva”; la “estrella” de *Fox News* Laura Ingraham por meses aseguró lo mismo e hizo una fuerte propaganda a la medicina. Un estudio de 368 pacientes de los hospitales de veteranos de guerras, probó que la droga estaba asociada con muertes por complicaciones cardíacas; *Lancet* concluyó que la droga es inefectiva tras investigar el efecto de la misma en 96.200 pacientes del virus. La Oficina Federal para el control de Medicinas (FDA) advirtió sobre el riesgo mortal de usar hidroxicloroquina, y un locutor de *Fox News* clamó “no la tomen, les matará”. A pesar de esta evidencia irrefutable, Trump continuó exhortando al país a tomar la medicina.
15. Los contribuyentes han pagado al menos un millón de dólares desde que el presidente asumió su cargo, por 1.600 habitaciones diarias en hoteles y clubes pertenecientes a la corporación de Trump manejada por sus hijos (Fahrenthold y Partlow, 2020). Una demanda judicial acusa a Trump de violación constitucional por recibir emolumentos adicionales a su salario y de corrupción por cobrar ganancias de su hotel en Washington D.C. (Larson, 2020).
16. A petición de Trump para ayudarlo en su reelección (Bolton, 2020), Xi Jinping le prometió comprar 200.000 millones de dólares en productos agrícolas, pero solo 36,6 millones en 2020, dichas compras estaban por debajo del nivel de 2017 y, por ello, los granjeros estadounidenses habían perdido 14.400 millones de dólares. Trump compensó estas, otorgando a los granjeros 23.500 millones de dólares en el primer paquete de rescate (Swanson y Rappeport, 2020).
17. Cuando era gobernador de la Florida, Scott endureció las normas de elegibilidad para recibir beneficios de desempleo, lo cual le permitió reducir los impuestos a los negocios.
18. La Oficina Presupuestal del Congreso proyecta una pérdida de 16 billones de dólares en la economía en una década (Cochrane, 2020).
19. Los republicanos están aprovechándose de la pandemia para demandar la construcción del muro y reforzar otras medidas inmigratorias. En abril, Trump anunció un decreto suspendiendo la inmigración y en

- junio prohibió la entrada a 500.000 trabajadores con visas, incluso a los que ya habían solicitado la residencia.
20. La tasa de desempleo disminuyó de 14,8 % en abril al 13,4 % en mayo, en parte por la ayuda a los desempleados. En junio el desempleo mermó a 11,1% (aun había 18 millones de parados). En julio, el desempleo menguó a 10,2% pero aún había 16,4 millones de parados y 30 millones estaban recibiendo algún beneficio de desempleo. El desempleo entre afroamericanos era de 14,6% y entre los hispanos 12,9%, superior a la tasa de los blancos 9,2%; las tasas en los tres grupos eran el triple que sus tasas respectivas en febrero antes de la pandemia y mayores que durante la crisis de 2008 (Cohen, 2020; Tankersley y otros, 2020; Tankersley y Cochrane, 2020; Krugman, 2020b; Schwartz y Friedman, 2020).
 21. Este dislate provocó una reacción negativa generalizada de los científicos que, junto con las productoras de desinfectantes y las autoridades, advirtieron al público de las consecuencias fatales de tomarlos o inyectárselos; aun así, muchos lo hicieron. Trump alegó que no había dicho eso seriamente sino de forma sarcástica ni siquiera *Fox News* aceptó esa explicación.
 22. Jared Kushner, asesor de la campaña presidencial, ha calificado las encuestas como “pura mierda” (Karni, 2020c).
 23. Después que Trump escapó al *impeachment*, la senadora republicana Susan Collins argumentó que él había aprendido “una gran lección”, a lo cual el asesor del Comité Judicial de la Cámara de Representantes Barry Berke ripostó que después de esa victoria, el presidente saldría envalentonado y haría lo que le plazca, predicción correcta como demuestra este artículo.
 24. El expresidente George W. Bush exhortó a la unidad nacional frente a la pandemia, señalando que “nuestras diferencias son pequeñas de cara a esta amenaza compartida... no somos combatientes, somos seres humanos... que nos salvaremos o hundiremos juntos.” Trump lanzó un *tuit* criticándolo porque no había apelado a la unidad cuando su *impeachment*: “¡El mayor engaño en la historia estadounidense!” (Lovelace, 2020).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abelson, R. (2020). “Coronavirus has fattened insured profit”, *The New York Times* (abreviado después como NYT), 6 agosto.
- Astor, M. (2020). “As North Carolina hesitates, 2 states offer to host G.O.P.”, NYT, 27 mayo.
- Baker, M. (2020). “International fraud ring siphoning unemployment”, NYT, 17 mayo.
- Baker, P. (2020a). Trump wants churches open; claim he can override states”, NYT, 23 mayo.
- Baker, P. (2020b). “President turns to and old ploy: Blame Obama”, NYT, 15 mayo.
- Baker, P. (2020c). “Trump stays quiet on toll as U.S. nears a milestone”, NYT, 25 mayo.
- Baker, P. (2020d). “Trump pivots in declaring pandemic is getting worse in the U.S”, NYT, 22 julio.
- Baker, P. (2020e). “Strategy of denial is failing Trump”, NYT, 25 julio.
- Baker, P. (2020f). “More than just a tweet: Behind Trump’s effort...”, NYT, 1 agosto.
- Baker, P. y E. Green (2020). “Minimizing risks, Trump pressures schools to reopen”, NYT, 8 julio.
- Baker y otros (2020). “Trump threatens to use force in major cities”, NYT, 21 julio.
- Barron, J. (2020). “Coronavirus update”, NYT, 11 agosto.
- Beck, M. (2020). “Wisconsin Supreme Court strikes down governor...”, *USA Today*, 13 mayo.
- Bernard, D. (2020). “Creator of Mount Rushmore’s ties to white supremacy”, *Washington Post*, 3 julio.
- Blanton, D. (2020). “Fox News poll...”, 16 junio.
- Bloomberg News* (2020). 14 mayo.
- Bolton, J. (2020). *The Room where all Happened* (New York: Simon & Schuster, 2020).

- Bosman, J. (2020). "Pandemic danger is a new high, the WHO warns", *NYT*, 20 junio.
- Bosman, J. and S. Mervosh (2020). "New wave is driven in part by youths", *NYT*, 26 junio.
- Bosman, J. y otros (2020). "New cases in U.S. slow, posing risk of complacency", *NYT*, 17 mayo.
- Burns, A. (2020). "Why the president lacks the power to delay the November election", *NYT*, 31 julio.
- Burns, A. y M. Haberman (2020). "As poll numbers dive....", *NYT*, 4 junio.
- Burns, A y otros (2020). "Biden holds 14-point edge over Trump", *NYT*, 25 junio.
- Cain, C. y otros (2020). "They backed Trump in 2016, but not this year", *NYT*, 2 julio.
- CARES Act (2020). "Coronavirus Aid Relief and Security Act", 27 marzo.
- Casselmann, B. (2020). "Second quarter contraction set a grim record", *NYT*, 31 julio.
- Cillizza, C. (2020). "Why Trump can't just postpone the November election", *CNN*, 14 mayo.
- CNBC (2020). Interview of Trump at Davos Forum, 22 enero.
- Cochrane, E. (2020). "Pandemic to carve \$16 trillion out of the U.S. economy...", *NYT*, 2 junio.
- Cochrane, E. y N. Fandos (2020). "Senate approves \$2 trillion stimulus...", *NYT*, 26 mayo.
- Cochrane, E. y Tankersley (2020a). "G.O.P. relief plan slices extra pay for unemployed", *NYT*, 28 julio.
- Cochrane, E. y Tankersley (2020b). "President undercuts aid talks...", *NYT*, 30 julio.
- Cochrane, E. y otros (2020). "Orders by Trump on economic aid breed confusion", *NYT*, 10 agosto.
- Cohen, P. (2020). "Uptick in claims hints at retreat in jobs recovery", *NYT*, 24 julio.
- Cohn, N. (2020a). "New numbers suggest a major erosion in Trump's support", *NYT*, 10 junio.

- Cohn, N. (2020b). “Biden gains lead in key states as Trump loses with voters”, *NYT*, 26 junio.
- Collman, A. (2020). “Jared Kushner’s shadow coronavirus taskforce...”, *Business Insider*, 6 mayo.
- Conlen, M. (2020). “Startling surge isn’t driven by rapid raise in screening”, *NYT*, 24 julio.
- “Coronavirus will only kill the weak, the old and the homeless” (2020), *Raw Story*, 9 mayo.
- “Cruise ships sailed despite the coronavirus. Thousands paid the price”, *Miami Herald*, 24 abril.
- DeParle, J. (2020a). “Millions of children await hunger aid: “This is dire””, *NYT*, 27 mayo.
- DeParle, J. (2020b). “Finding refuge and reliability in food stamps”, *NYT*, 20 julio.
- Derysh, I. (2020). “Trump refuses to promise his own company won’t get a tax bailout”, *NYT*, 23 marzo.
- Dicker, R. (2020). “Donald Trump has stake in hydroxichloquina drugmaker”, *Huffpost*, 7 abril.
- Dzhanova, Y. (2020). “Trump D.C. hotel seeking government relief ...”, *CNBC*, 21 abril.
- Drucker, J. y J. Tankersley (2019). “Big firms won new tax breaks from Trump...”, *NYT*, 31 diciembre.
- Drucker, J. y otros (2020). “How wealthy hospitals reaped billions in bailout”, *NYT*, 26 mayo.
- Eisenger, J. y P. Kiel (2018). “Why the rich don’t get audited”, *NYT*, 3 mayo.
- Enrich, D. y otros (2020). “Trump’s bank was subpoenaed...”, *NYT*, 6 agosto.
- Epstein, R. (2020). “How far would Trump go to keep job?”, *NYT*, 25 mayo.
- Fausset, R. y otros (2020). “Expect a Fourth with more fizzle than bang”, *NYT*, 3 julio.
- Fahrenthold, D. y J. Partlow (2020). *The Washington Post*, 14 mayo.
- Flitter, E. (2020). “Minorities got less aid from program for business”, *NYT*, 19 mayo.

- Flitter, E. y S. Cowley (2020). “Banks give richest clients concierge treatment...”, *NYT*, 22 abril.
- Fredericks, B. (2020). “US should reopen the economy— even if more die”, *New York Post*, 15 abril.
- Gamio, L. (2020). “States that ended shutdowns early, are leading the surge...”, *NYT*, 11 julio.
- Glaber, E. y M. Keller (2020), “Prescriptions surged as Trump praised drugs...”, *NYT*, 24 abril.
- Glanz, J. y C. Robertson (2020). “Lockdown delay cost at least 36,000 lives”, *NYT*, 21 mayo.
- Goldmacher, S. (2020). “Race will end Nov. 3, right? Don’t bet on it”, *NYT*, 25 junio.
- Grady, D. (2020). “Vaccine early test result elevates hopes and stocks”, *NYT*, 19 mayo.
- Green, E. (2020). “DeVos funnels relief to revive stalled agenda”, *NYT*, 16 mayo.
- Grynbaum, M. y M. Haberman (2020). “As Trump demands CNN retract a poll...”, *NYT*, 11 junio.
- Haberman, M. y otras (2020). “Trump cancels party conclave in Jacksonville”, *NYT*, 24 julio.
- Heasten, H. (2020). “Historians will likely rank Trump...”, *CNN*, 12 julio.
- Habler, S. y D. Goldstein (2020). “825.000 students in California...”, *NYT*, 13 julio.
- Hulse, C. (2020). “Facing headwinds Republicans begin to split from Trump”, *NYT*, 24 julio.
- Jackson, D. (2020). “Trump says he disagrees with Georgia Gov. Brian Kemp’s...”, *US Today*, 22 abril.
- Jacobs, J. y otros (2020). “Trump declares he has ‘total’ authority to reopen”, *Bloomberg*, 13 abril.
- Johnson, J. (2020). “Democrats to Trump State Department...”, *Salon*, 18 mayo.
- Kaplan, S. y otros (2020). “Industry ties pose possible conflicts...”, *NYT*, 21 mayo.

- Karni, A. (2020a). “With U.S. in grip of virus, Trump puts on a show”, *NYT*, 4 julio.
- Karni, A. (2020b). “Presidents rally postponed by weather campaign says”, *NYT*, 11 julio.
- Karni, A. (2020c). “Trump’s response on poll numbers: They have been wrong before”, *NYT*, 23 julio.
- Karni A. y M. Haberman (2020). “Kushner, law aside, doesn’t rule out delaying election”, *NYT*, 12 mayo.
- Karni, A. y K. Thomas (2020). “President says he takes drug deemed risk”, *NYT*, 19 mayo.
- Karni y otros (2020a). “Convention move gives GOP financial headache in 2 cities”, *NYT*, 5 julio.
- Karni y otros (2020b). “Behind the scenes of a u-turn on Trump’s Jacksonville party”, *NYT*, 25 julio.
- Krauss, C. (2020). “Oil nations, prodded by Trump, reach deal to slash production”, *NYT*, 12 abril.
- Kristof, N. (2020a). “Crumbs for the hungry, windfalls for the rich”, *NYT*, 24 mayo.
- Kristof, N. (4 de junio de 2020). “Trump uses the military to proof his manhood”. *The New York Times*.
- Kristof N. (19 de julio de 2020). “We interrupt this gloom to offer...hope”. *The New York Times*.
- Krugman, P. (9 de abril de 2020). “American democracy may be dying”. *The New York Times*.
- Krugman, P. (3 de julio de 2020). “Trump’s virus is spreading and his economy stalling”. *The New York Times*.
- Kuns, K. (23 de marzo de 2020). “Larry Kudlow makes the ‘die quickly so we can restart the economy’ argument for Trump”. *Crooks and Liars*.
- LaFraniere, S. (8 de junio de 2020). “More billions to farms, this time for virus aid.”. *The New York Times*.
- LaFraniere, S. (3 de Agosto 2020). “Scientists fret as White House rushes vaccine”. *The New York Times*.

- LaFraniere, S. & Qiu, L. (29 de julio de 2020). "Under fire, Barr defends actions against protesters". *The New York Times*.
- Larson, E. (14 de mayo de 2020). "Trump hotel profits back in spotlight with court reversal". *Bloomberg*.
- Leatherby, L. (18 de junio de 2020). "Coronavirus is hitting black business owners hardest". *The New York Times*.
- LeBlanc, P. (14 de mayo de 2020). "McConnell admits he was wrong to say Obama administration failed to leave a pandemic playbook". *CNN Politics*.
- Leonardi, A. (23 de marzo de 2020). "Texas lieutenant governor says grandparents are willing to risk dying from coronavirus to save economy". *Washington Examiner*.
- Leonhardt, D. (7 de Agosto de 2020). "U.S. is alone among peers in failing to contain virus". *The New York Times*.
- Lerer, L. & Plott, E. & Gamio, L. (28 de junio de 2020). "Voter's mood: Tired, anxious and optimistic". *The New York Times*.
- Lieber, R. & Cowey, S. (10 de Agosto 2020). "Questioning Trump plan on relied aid". *The New York Times*.
- Liptak, A. (13 de mayo de 2020). "Justices hint at split in 2 cases on Trump records". *The New York Times*.
- Liptak, A. (10 de julio de 2020). "Court backs a subpoena on Trump's tax records, with some limits". *The New York Times*.
- Lipton, E. & Fandonn N. (19 de marzo de 2020). "Senator Richard Burr sold a fortune in stocks as G.O.P. Played Down Coronavirus Threat". *The New York Times*.
- Lipton, E. & Sanger, D. E. & Haberman, M. & Shear, M. & Mazzatti, M. & Barnes, J. (11 de abril 2020). "He could have seen what was coming: Behind Trump's failure on the virus". *The New York Times*.

- Londoño, E. (9 de julio de 2020). “Brazil’s president says pill works for him”. *The New York Times*.
- Londoño, E. & M. Simões (14 de junio de 2020). “Defying science, Brazil’s leader trumpets unproven ‘Cure’”. *The New York Times*.
- Lovelace, R. (3 de mayo de 2020). “Trump rips George W. Bush’s call to end partisanship amid coronavirus”. *The Washington Times*.
- Martin, J. (29 de abril de 2020). “Florida stops medical examiners from releasing coronavirus death data: Report”. *Newsweek*.
- Martin, J. (7 de junio de 2020). “Trump 2020? In the G.P.O. some demur”. *The New York Times*.
- Mazzei, P. (7 de julio de 2020). “Virus finds a feast at house parties in Florida”. *The New York Times*.
- Mazzei, P. & Mervosh, S & Hubler, S (27 de junio de 2020). “States backtrack on relaxed limits as cases explode”. *The New York Times*.
- McNeil, D. & A. Jacobs (30 de mayo de 2020). “Attacking China, Trump says will cut ties with WHO”. *The New York Times*.
- Merchante, M. y D. Cetoute (29 de mayo de 2020). “Florida sees largest COVID-19 case increase in over a month”. *Miami Herald*.
- Mervosh, S. (28 de mayo de 2020). “An `Avalanche of evictions` could be bearing down on America’s renters”. *The New York Times*.
- Mesa-Lago, C. (2017). “*The defeat of Trumpcare*”. *Transition*. No. 124, pp. 24-26.
- Mesa-Lago, C. (29 de enero de 2019). “Trump: Dos años de (no) política exterior”. *Estudios de Política Exterior*.
- Mesa-Lago, C. (junio 2020). “Las inequidades de Donald Trump”. *Nueva Sociedad*.
- Mukheerjee, S. (14 de junio de 2020). Panel discussion on the challenges of developing a COVID-19 vaccine”. *The New York Times*.
- Munvihill, G. (5 de mayo de 2020). “States with few virus cases get big share of relief aid”. *AP*.
- National Academy of Social Insurance—NASI (8 de agosto de 2020). “President Trump’s Executive Order Suspending the Payroll Tax: Statement from Bill Arnone and Bill Rodgers, National Academy of Social Insurance”.

- Olmos, S. & Baker, M & Kanno- Youngs, Z. (18 de julio de 2020). “The city’s alarm, federal officers police Portland”. *The New York Times*.
- Oppel, R. & Gebelogg, R. & Lai, R. & Smith M. (6 de julio de 2020). “Racial disparity in cases stretches all across board”. *The New York Times*.
- Orden, E. (20 de mayo de 2020). “Judge allows fraud suit against Trump, family and company to proceed”. CNN.
- Papenfuss, M. (1 de Agosto de 2020). “Ivanka Trump and Jared Kushner raked in \$36 million Last Year While Serving In The White House”. *HuffPost*.
- Kimbel-Sannit, A. (9 de septiembre de 2019). “Trump again jokes about extending his term past 2024”. *Político*.
- Popovich, N. & Sanger-Katz, M. (29 de mayo de 2020). “In battling outbreak, herd immunity remains distant objective”. *The New York Times*.
- Qiu, L. (27 de junio de 2020). “Pence misleads on reopening, testing and trend in fatalities”. *The New York Times*.
- Quealy, K. (16 de mayo de 2020). “As virus hit New York, the rich hit the road”. *The New York Times*.
- Rabin, R. & Cameron, C. (6 de julio de 2020). “A false claim from Trump: 99% of Cases Are Harmless”. *The New York Times*.
- Rappeport, A. & McCabe, D. (14 de mayo de 2020). “Big companies ignore rebuke over aid loans”. *The New York Times*.
- Rappeport, A. & Smialek, J (1 de julio de 2020). “Optimism by Mnuchin is tempered by Powell”. *The New York Times*.
- Rappeport, A. & Fandos, N (18 de julio de 2020). “Mnuchin asks Congress to pass more Stimulus this month”, *The New York Times*.
- Rashbaum, W. K. (28 de mayo de 2020). “Used car salesman charged \$45 million scheme to Sell N95 Masks”. *The New York Times*.
- Rashbaum, W. & Weiser, B. (4 de agosto de 2020). “Filings seeking trump records hit at fraud”. *The New York Times*.
- Rogers, K. (20 de julio de 2020). “Trump interview in Fox grows testy over claims about pandemic and polls”. *The New York Times*.

- Rosenthal, B. M. & Goldstein, J. & Otterman, S. & Fink, S. (2 de julio de 2020). “A stark factor in beating covid: which hospital you can afford”. *The New York Times*.
- Ross, A. (28 de abril de 2020). “Florida reports jump in deaths as nation reports more than 1 million cases of coronavirus”. *Tampa Bay Times*.
- Russonello, G. (16 de mayo de 2020). “Trump’s ratings are sagging, yet Biden’s lead is still shaky not surging”. *The New York Times*.
- Samuels, A. (21 de abril de 2020). “Dan Patrick says ‘there are more important things than living and that’s saving this country’”. *The Texas Tribune*.
- Sanger, D. & Savage, C. (23 de mayo 2020). “A post-Watergate reform under pressure by Trump”. *The New York Times*.
- Schwartz, N. & Friedman, G. (8 de agosto de 2020). “U.S. job growth slows, signaling longer recovery”. *The New York Times*.
- Segers, G. (2 de mayo de 2020). “Trump to replace health inspector general who criticized coronavirus response”. *CBS News*.
- Senior, J. (8 de junio de 2020). “Dare I say it? Is this the Trump tipping point?” *The New York Times*.
- Shear, M. (13 de mayo de 2020). “All west wing employees, except top two, are ordered to wear masks”. *The New York Times*.
- Shear, M. & Vogel, K. (1 de agosto de 2020). “Trump attacks on mail service sow voting fears”. *The New York Times*.
- Silver-Greenberg & Drucker, J & Enrich, D. (8 de junio de 2020). “Hospitals got bailout and furloughed thousands while paying C.E.O. s millions”. *The New York Times*.
- Smialek, J. (15 de mayo de 2020). “Poor Americans are hit hardest by job losses”. *The New York Times*.
- Smialek, J. (18 de mayo de 2020). “Fed chairman warns that recovery may ‘stretch’ through 2021”. *The New York Times*.
- Smialek, J. y otros (22 de abril de 2020). “Luxury hotel company is biggest beneficiary of small – business funds”. *The New York Times*.
- Smialek, J. & Tankersley, J. & Cochrane, E. (14 de mayo de 2020). “Fed chair warns of lasting harm without new aid”. *The New York Times*.

- Smialek, J. & Rappeport, A. (11 de junio de 2020). "Fed chair says economy pain may last years". *The New York Times*.
- Social Security (2020). *Income taxes and your social security*.
- Stolberg, S. (13 de mayo de 2020). "Opening too soon poses deadly risk, senate is warned". *The New York Times*.
- Stolberg, S. (15 de mayo de 2020). "Slow response cost lives, ousted scientist testifies". *The New York Times*.
- Stolberg, S. (14 de julio de 2020). "5.4 million Americans lost health insurance". *The New York Times*.
- Stolberg, S. (15 de julio de 2020). "Trump administration to collect hospital's virus data from now on". *The New York Times*.
- Stolberg, S. & Weiland, N (24 de junio de 2020). "Experts sketch gloomy picture of virus spread". *The New York Times*.
- Stolberg, S. & Weiland, N (1 de julio de 2020). "No region safe, as cases soar, Fauci cautions". *The New York Times*.
- Sullivan, E. & Green, E. (11 de julio de 2020). "CDC document warns of highest risk in fully reopened schools". *The New York Times*.
- Swanson, A. & Rappeport, A. (20 de junio de 2020). "Trump's appeal to China did little for farmers". *The New York Times*.
- Tankersley, J. (7 de mayo de 2020). "Trump eyes new tax cuts for next stimulus package". *The New York Times*.
- Tankersley, J. (17 de mayo de 2020). "A giant deficit, once dreaded, is now desired". *The New York Times*.
- Tankersley, J. (31 de marzo de 2020). "White House economists warned in 2019 a pandemic could devastate America". *The New York Times*.
- Tankersley, J. & Cochrane E. & Smialek, J. (6 de junio 2020). "Jobless rate dips, defying outlook; U.S. stocks surge". *The New York Times*.
- Tankersley, J. & Cochrane E. (3 de julio de 2020). "Congress press to move on new stimulus package". *The New York Times*.
- Tavernise, S. (24 de mayo de 2020). "Another casualty of the virus...". *The New York Times*.
- U.S. Congress (Diciembre 2017) "Tax Cuts and Jobs Act".

- The Coronavirus Relief Law—CARES Act (27 de marzo de 2020). Washington DC.
- Thomas, K. (8 de julio de 2020). “U.S. pledges \$1.6 billion to untested drugmaker”. *The New York Times*.
- N/A. Trump Administration ignored pandemic warning from White House economists” (1 de abril de 2020). *The Intellectualist*.
- N/A. (15 de mayo de 2020). “Trump insinúa que podría ser presidente durante 9 o 13 años más”, *Nuevo Herald*.
- Twohey, M. (10 de julio de 2020). “Who would get vaccinated first?”. *The New York Times*.
- Villarreal, D. (13 de abril de 2020). “NY Gov. Andrew Cuomo responds to Trump claim of absolute authority: ‘We don’t have a king’”. *Newsweek*.
- Wagner, J. (14 de mayo de 2020). “Sen. Lindsey Graham Rejects Trump’s call to summon Obama to testify on alleged ‘Obamagate’ conspiracy”. *The Washington Post*.
- Wilkinson, W. (26 de mayo de 2020). “The brutal clarity of the Trump-McConnell plan”. *The New York Times*.
- Wines, M. (22 de mayo de 2020). “Trump attacks mail voting, but states keep ordering envelopes”. *The New York Times*.
- Wolf, Z. (11 de mayo de 2020). “Rebellion in Pennsylvania”. CNN, *What matters*.
- Wolf, Z. (10 de junio de 2020). “Data is not the problem”. CNN, *What matters*.
- Zeleny, J. (9 de mayo de 2020). “Obama says White House response to coronavirus has been ‘absolute chaotic disaster’”. CNN.

RESUMEN

La Aplicación por Trump de la “Ley de Embudo” al COVID-19 en Estados Unidos

El trabajo analiza las inequidades en las políticas de Donald Trump relacionadas con la Reforma Tributaria de 2017 y con la COVID-19. De esta manera, abordaremos: 1) su política tardía frente a la pandemia;

2) la inconstitucionalidad de su declaración de tener pleno poder sobre los estados; 3) los numerosos casos en los que Trump, sus aliados y las grandes corporaciones se han beneficiado del COVID-19; 4) los paquetes de rescate económico, el enfoque en ayudar a las grandes corporaciones y la lucha de los demócratas para mejorar la equidad; 5) el triaje que teóricamente debe ser objetivo y ético pero en la práctica privilegia a los ricos y poderosos mientras sacrifica a los pobres, ancianos, hispanos y afroamericanos y 6) la reacción de la sociedad a las políticas de Trump sobre la COVID-19 y su impacto potencial en las elecciones.

ABSTRACT

Trump's Enforcement of the "Law of the Funnel" to COVID-19 in the United States

This paper analyzes the inequities in Donald Trump's policies related to the 2017 Tax Reform and COVID-19. In this way, we will address: 1) his late politics to face the pandemic; 2) the unconstitutionality of his declaration of having full power over the states; 3) the numerous cases in which Trump, his allies and large corporations have benefited from COVID-19; 4) the economic rescue packages, the focus on helping large corporations and the Democrats' fight to improve equity; 5) triage that theoretically should be objective and ethical but in practice privileges the rich and powerful while sacrificing the poor, elderly, Hispanics and African Americans and 6) the reaction of society to Trump's policies on COVID-19 and its impact on USA elections.

SUMMARIO

A Aplicação da “Lei de Funil” por Trump à Covid-19 nos EUA

Estuda a desigualdade nas políticas de Donald Trump, primeiro com relação à reforma tributária de 2018 e depois com relação à Covid-19: 1) a política tardia e infeliz do Presidente (ou falta dela) diante da pandemia; 2) a inconstitucionalidade de sua declaração de ter poder total contra os Estados; 3) os inumeráveis casos em que Trump, seus aliados e as grandes corporações beneficiaram-se da COVID-19; 4) os pacotes de resgate econômico, a concentração inicial em ajudar as

grandes corporações e a batalha dos democratas para torná-lo mais equitativo; 5) a triagem que teoricamente deve ser objetiva e ética, na prática privilegia os ricos e arrogantes enquanto sacrifica os pobres, hispânicos e afro-americanos; e 6) a reação do povo à política de Trump sobre a Covid-19 e seu impacto potencial nas eleições.